



ANALES DEL CONCEJO

DE BOGOTÁ, D.C.

PROYECTOS DE ACUERDO

AÑO II N°. 4031 DIRECTORA: LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO. OCTUBRE 17 DEL AÑO 2025

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

<u>PROYECTO DE ACUERDO N° 876 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA EL USO DE LA BICICLETA EN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO”	41900
<u>PROYECTO DE ACUERDO N°877 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA DE TALENTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, “BOGOTÁ, LA CAPITAL DEL TALENTO INFANTIL” EN EL DISTRITO CAPITAL”	41913
<u>PROYECTO DE ACUERDO N°878 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	41921
<u>PROYECTO DE ACUERDO N°879 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDEN LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS Y SOCIALES OTORGADOS POR EL DISTRITO CAPITAL A AQUELLOS CIUDADANOS BENEFICIARIOS QUE ESTÉN SIENDO INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS O CONTRAVENCIONES EN EL MARCO DE UNA MANIFESTACIÓN PÚBLICA”	41930
<u>PROYECTO DE ACUERDO N° 880 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS CAMBIOS DE NOMENCLATURA VIAL EN EL DISTRITO CAPITAL”	41947
<u>PROYECTO DE ACUERDO N° 881 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA DESCONGESTIÓN DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA QUE ESTÁN BAJO LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	41960
<u>PROYECTO DE ACUERDO N° 882 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y EXHIBICIÓN DEL CAR AUDIO Y TUNING COMO EXPRESIÓN CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL DISTRITO CAPITAL”	41980
<u>FE DE ERRATAS AL PROYECTO DE ACUERDO N° 882 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y EXHIBICIÓN DEL CAR AUDIO Y TUNING COMO EXPRESIÓN CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL DISTRITO CAPITAL”	41990
<u>PROYECTO DE ACUERDO N° 883 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS TRANQUILAS EN BOGOTÁ D.C. COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	41991

PROYECTO DE ACUERDO N° 876 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA EL USO DE LA BICICLETA EN LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO "****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

Fomentar y fortalecer el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible entre los funcionarios de las entidades distritales, mediante la implementación de un sistema integral de incentivos, que incluye la concesión de tiempo libre remunerado y la promoción de infraestructura adecuada para su utilización.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

- Artículo 2 – Constitución Política de Colombia: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
- Artículo 334 – Constitución Política de Colombia: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.
- Sentencia T-154 de 2013 – Corte Constitucional

En cuanto al derecho al medio ambiente, promovido mediante el uso de medios alternativos como la bicicleta, la Corte Constitucional destacó su importancia en la Sentencia T-154 de 2013. En este fallo, se subraya la relevancia de las políticas dirigidas a la protección ambiental,

considerándolo un tema de interés general vinculado directamente al derecho a la vida. Frente a la salvaguarda de este derecho y de la integridad personal, la Corte ha establecido que la autoridad de tránsito goza de una amplia facultad de intervención.

Del orden Nacional:

- Ley 336 de 1996 – Por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte.

Artículo 3°. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

- Ley 1503 de 2011 – “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”.

Promueve hábitos seguros en la vía y aborda mejoras en procedimientos y elementos para la seguridad vial de los usuarios de bicicletas.

- Ley 1811 de 2016 “Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito”

Artículo 1° (...) “La presente ley tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional; incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana”

Del orden Distrital:

- Acuerdo 663 de 2017 “Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital”

Artículo 1°. (...) La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, promoverá una estrategia institucional que fomente e incentive el uso de diferentes medios alternativos y sostenibles de transporte, con el fin de generar la racionalización del uso del vehículo particular, promover la protección al medio ambiente y contribuir a una movilidad socialmente responsable con la ciudad.

- Decreto Distrital 672 de 2018 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones”

Artículo 17°. Subdirección de la Bicicleta y el Peatón. Son funciones de la Subdirección de la Bicicleta y el Peatón: (...) 3. Elaborar las políticas, planes, programas, proyectos, conceptos y lineamientos de transporte no motorizado, en Bogotá D.C., 4. Liderar la coordinación

interinstitucional para el desarrollo de políticas públicas, planes, programas, proyectos, lineamientos y estrategias en materia de transporte no motorizado en Bogotá D.C., (...) y 9. Definir e implementar programas, planes, proyectos, protocolos, acciones e instrumentos para la promoción del uso de la bicicleta y la caminata como modos de transporte. (...).

•Decreto 813 de 2017 “Por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial y de Motociclista 2017-2026”

El Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 de Bogotá busca reducir la accidentalidad vial enfocándose en la protección de usuarios vulnerables como los ciclistas. Para esto, planea implementar capacitaciones en seguridad vial para ciclistas, identificar y mejorar caminos seguros para bicicletas, y realizar auditorías de seguridad vial en proyectos de infraestructura.

•Acuerdo 804 del 2021 “Por medio del cual se declara la bicicleta como medio de transporte prioritario en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones para fortalecer su uso”

Declara la bicicleta como modo (sic) de transporte prioritario en Bogotá para la superación de la crisis producto del COVID-19 y el desarrollo de una ciudad sostenible en el largo plazo, y plantea los siguientes objetivos:

1. Promover y facilitar el distanciamiento físico, como medida para enfrentar el COVID- 19.
2. Prevenir la congestión del sistema de transporte público masivo.
3. Facilitar la movilización segura de los ciudadanos en escenarios de post cuarentena, o de reactivación económica sectorial.
4. Contribuir a la mejora de la calidad del aire de la ciudad.
5. Fomentar la actividad física.

Así mismo en el artículo 1 se estipula que, “Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad realizará de manera prioritaria y urgente los ejercicios de redistribución del espacio vial y otras acciones que considere necesarias, con el objetivo de proveer el ciclo de infraestructura que permita una circulación bajo condiciones de seguridad.”.

•Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital (CONPES D.C.) 015 de 2021 “Política Pública de la Bicicleta 2021-2039”

Su objetivo general “Mejorar las condiciones físicas, socioeconómicas y culturales de la ciudad para el uso y disfrute de la bicicleta” Se pretende fomentar su desarrollo mediante la consecución de cinco objetivos específicos que incluyen:

1. “Más seguridad personal” con el que se busca optimizar las condiciones de seguridad personal para la ciudadanía que usa la bicicleta en Bogotá.
2. “Mayor seguridad vial” pretende proteger a los ciclistas de la ciudad frente a siniestros viales asociados al uso de la bicicleta.
3. “Más y mejores viajes en bicicleta” desarrolla acciones en pro de mejorar la experiencia de viaje de los ciclistas en Bogotá.

4. “Más bici para todas y todos” con el que se quiere fortalecer la cultura en torno a la bicicleta.

La promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte no solo busca aliviar la congestión vehicular, sino que también genera beneficios ambientales, sociales y económicos que impactan positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Este proyecto encuentra su fundamentación en diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, lo que amplía su impacto y aborda aspectos adicionales.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La creciente adopción de la bicicleta como medio de transporte en Bogotá no solo evidencia una transformación significativa en los hábitos de movilidad de la ciudad, sino que también destaca la importancia de incrementar los incentivos y promover aún más el uso de este medio sostenible. Este aumento sustancial, evidenciado en los resultados de la Encuesta de Movilidad 2019, no solo se traduce en números impresionantes, como los 880.000 viajes diarios en bicicleta, sino que también refleja un cambio cultural hacia una movilidad más consciente y saludable. Esta cifra muestra un importante aumento del 37,85% en comparación con 2015, cuando se registraban 639.643 viajes diarios en bicicleta según la misma encuesta. Es decir que en solo 4 años el uso de la bicicleta prácticamente se ha duplicado.

En un contexto donde la bicicleta se posiciona como el medio de transporte más utilizado para trayectos menores a 5 km y representa el 65% de los desplazamientos en la ciudad, según un estudio de la Universidad Libre¹, es imperativo reconocer la necesidad de fortalecer los incentivos para consolidar este cambio positivo. Además, la bicicleta no solo contribuye al bienestar físico individual, sino que también juega un papel crucial en la mitigación del cambio climático al reducir las emisiones de CO₂ y generar un significativo ahorro económico anual.

Por otra parte, se estima que alrededor de 240.000 personas usan la bicicleta a diario en Bogotá para ir a trabajar o estudiar, de acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2017. Esta tendencia ascendente se ve reflejada en la continua expansión de la infraestructura para bicicletas impulsada por la ciudad. Bogotá cuenta actualmente con más de 540 km de ciclorutas, la red más extensa de Latinoamérica.^{2 3}

En términos económicos, se estima que las actividades directamente relacionadas con la bicicleta generan cerca de 32.000 empleos en Bogotá, una cifra equivalente a la del sector turismo en la ciudad.⁴ Por otra parte, el uso de la bicicleta en reemplazo de vehículos motorizados representa un ahorro anual de 1,27 billones de pesos en emisiones de CO₂. A nivel individual, se calcula que los usuarios de bicicleta ahorran un promedio de 41.087 pesos mensuales en tiempo de transporte en comparación con otros medios.

¹ Universidad Libre. (2018). Caracterización de biciusuarios en Bogotá. Bogotá: Universidad Libre.

² BID. (2015). Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta. BID.

³ Alcaldía de Bogotá. (2019). Infraestructura para bicicletas en Bogotá. Recuperado de <https://bogota.gov.co/>

⁴ SDE-DEDE. (2019). Caracterización de la economía de la bicicleta en Bogotá. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

A pesar de los beneficios ya evidentes, es crucial destacar que el acceso equitativo a la infraestructura ciclable y los incentivos asociados no es uniforme en todas las áreas de la ciudad, especialmente en las localidades de estratos bajos (1 y 2). La concentración de esfuerzos y recursos en estas zonas vulnerables es esencial para garantizar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades de acceder a los beneficios de la movilidad en bicicleta y que se promueva una transformación inclusiva y sostenible en toda Bogotá.⁵

Finalmente, el incremento sostenido en el uso de la bicicleta en Bogotá es un testimonio elocuente de la aceptación y adopción generalizada de un modo de transporte más saludable y respetuoso con el medio ambiente. La significativa participación de la comunidad en la movilidad en bicicleta no solo demuestra un cambio cultural positivo, sino que también resalta la necesidad apremiante de reforzar y expandir los incentivos asociados. La bicicleta no solo representa una alternativa eficiente para trayectos cortos, sino que también contribuye de manera tangible a la salud pública, la reducción de emisiones de CO₂ y el ahorro económico a nivel individual y colectivo. Sin embargo, la disparidad en la infraestructura disponible, particularmente en áreas de bajos recursos, subraya la urgencia de dirigir inversiones específicas para garantizar una movilidad en bicicleta equitativa y accesible para todos los ciudadanos.

Contexto internacional

En el ámbito internacional, la promoción de la bicicleta como medio de transporte sostenible se ha consolidado como una estrategia integral para abordar desafíos relacionados con la movilidad, la salud, el medio ambiente y el desarrollo urbano. Diversos países, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Alemania, han implementado iniciativas y políticas que ofrecen incentivos económicos y fiscales, reflejando un compromiso global con los principios de desarrollo sostenible y la mitigación de impactos adversos.

Esta orientación internacional no solo busca aliviar la congestión vehicular, sino también mejorar la salud y el bienestar ciudadano, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear entornos urbanos más sostenibles. Experiencias exitosas en naciones europeas, como Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Alemania, evidencian un interés común en transformar la movilidad urbana mediante estímulos económicos para el uso de la bicicleta.

En España, la Estrategia Estatal de la Bicicleta y las iniciativas privadas, como las de la empresa Ingeteam, reflejan el creciente interés por fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. La visión de la bicicleta como una alternativa sostenible se extiende por toda Europa, donde países como Francia y Países Bajos han implementado innovadoras iniciativas para recompensar económicamente a quienes eligen la bicicleta en lugar de vehículos motorizados, promoviendo entornos más amigables y reduciendo la presencia de automóviles en las ciudades.

Estos programas no solo destacan el aspecto ecológico, sino también los beneficios para la salud individual y colectiva. En países líderes en el uso de la bicicleta, como Países Bajos,

⁵ Encuesta Multipropósito. (2017). Movilidad en bicicleta en Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación.

Dinamarca, Suecia y Alemania, la inversión en infraestructura ciclista, incentivos fiscales y programas de subsidios ha contribuido al éxito de esta modalidad de transporte.

Los Países Bajos, reconocidos mundialmente como el paraíso de las bicicletas, han establecido un modelo con una infraestructura ciclista bien desarrollada y segura, incluyendo carriles exclusivos, semáforos específicos y amplios estacionamientos. En Dinamarca, donde aproximadamente el 27% de los viajes se realizan en bicicleta, la inversión en carriles y rutas ciclistas bien señalizadas ha sido fundamental. Suecia, con alrededor del 17% de sus desplazamientos en bicicleta, ha implementado políticas y programas, como incentivos fiscales y subsidios, para fomentar su uso. Alemania, donde cerca del 12% de los viajes son en bicicleta, destaca por su extensa red de carriles y estacionamientos.

A nivel global, la bicicleta no solo responde a problemas de movilidad; además, se posiciona como una herramienta clave para enfrentar el cambio climático y mejorar la calidad de vida. Estas iniciativas son ejemplos inspiradores que demuestran cómo la bicicleta se está convirtiendo en un pilar fundamental para construir ciudades más sostenibles y saludables en todo el mundo.

Acerca de la derogatoria del acuerdo xxxx de 2016

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS ODS⁶:

- ODS 3 - Salud y Bienestar:

La promoción del uso diario de la bicicleta no solo reduce la congestión vehicular, sino que también fomenta la actividad física, mejorando la condición física y cardiovascular de los ciudadanos y contribuyendo a la prevención de enfermedades relacionadas con la inactividad. El proyecto, al incentivar el uso de la bicicleta entre los funcionarios del distrito, impactará directamente en su bienestar y calidad de vida, promoviendo hábitos saludables y previniendo enfermedades cardiovasculares, respiratorias y musculoesqueléticas.

Esta iniciativa se alinea con las metas específicas del ODS 3, que incluyen:

- Meta 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, así como promover la salud mental y el bienestar. El fomento del uso de la bicicleta contribuye a la promoción de la salud cardiovascular y física, apoyando la meta de reducir las enfermedades no transmisibles.
- Meta 3.9: Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. El uso de la bicicleta como alternativa al transporte motorizado contribuye a la reducción de la contaminación del aire, mejorando la calidad ambiental y la salud general de la población.

⁶ Naciones Unidas. *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

- ODS 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles:

La bicicleta, como medio de transporte no motorizado, no emite CO₂ ni otros contaminantes atmosféricos, mejorando significativamente la calidad del aire. Además, la promoción de su uso impulsa el desarrollo de infraestructuras amigables para ciclistas, haciendo las ciudades más sostenibles y accesibles. La adopción masiva de la bicicleta propuesta por este proyecto reducirá la huella de carbono, la contaminación atmosférica y auditiva generada por el parque automotor, mejorando la eficiencia del sistema de movilidad y disminuyendo los tiempos de viaje.

Esta iniciativa se alinea con las metas específicas del ODS 11, que incluyen:

- Meta 11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público. La promoción del uso de la bicicleta contribuye directamente a ofrecer un sistema de transporte sostenible y seguro, cumpliendo con esta meta.
- Meta 11.6: De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluyendo la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales. El fomento del ciclismo como medio de transporte ayuda a reducir la huella ambiental de las ciudades, especialmente en términos de calidad del aire y gestión de desechos.
- Meta 11.7: De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. La promoción del uso de la bicicleta contribuye a la creación de entornos urbanos más accesibles y seguros, fomentando el acceso a zonas verdes y espacios públicos.
- Meta 11.a: Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. La promoción del ciclismo contribuye a la creación de ciudades más integradas y sostenibles, fortaleciendo los lazos entre áreas urbanas y rurales.
- Meta 11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados para construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Aunque el proyecto no se centra directamente en la construcción de edificios, la promoción del ciclismo puede contribuir indirectamente al desarrollo sostenible y la resiliencia urbana.

- ODS 13 - Acción por el Clima:

La bicicleta es una alternativa ecológica al transporte motorizado, ya que no utiliza combustibles fósiles, contribuyendo así a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la mitigación del cambio climático. El proyecto tiene un papel crucial en la acción por el clima al promover la bicicleta como una alternativa sostenible.

Esta iniciativa se alinea con las metas específicas del ODS 13, que incluyen:

- Meta 13.1: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. La promoción del uso de la bicicleta contribuye a la resiliencia climática al reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mitigando así los riesgos asociados al cambio climático.
- Meta 13.2: Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. El proyecto propuesto, al fomentar la movilidad sostenible, aborda directamente las medidas para mitigar el cambio climático en el ámbito local.
- Meta 13.3: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. La promoción del uso de la bicicleta no solo tiene beneficios ambientales, sino que también contribuye a sensibilizar y educar a la población sobre alternativas sostenibles en la movilidad urbana.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” contempla dentro de sus propósitos centrales la promoción de una movilidad sostenible para la ciudad.

Específicamente, el Propósito 4 plantea “Hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible”. Para ello, una de las estrategias es el mejoramiento integral de la red de ciclorutas de la ciudad, con el fin de aumentar el número de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte.

En este contexto, el Artículo 106 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 *“Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020- 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”* adopta la política pública de la bicicleta, buscando mejorar las condiciones para su uso y disfrute. Dentro de sus énfasis se encuentra el fortalecimiento de la cultura en torno a este medio, la seguridad vial para ciclistas, y la articulación interinstitucional para su gestión.

Asimismo, el Artículo 107 contempla la implementación del Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá, como parte del Programa Estratégico de Movilidad Sostenible.

Estos elementos demuestran la importancia conferida por el Plan de Desarrollo Distrital al fomento del uso de la bicicleta, en línea con el presente proyecto de acuerdo que busca incentivar este medio de transporte sostenible entre los funcionarios de las entidades distritales.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente “Bogotá Reverdece 2022 – 2035”, compilado en el Decreto 555 de 2021

El presente proyecto de acuerdo se alinea con la visión integral del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito Capital. En respuesta a la Política de Movilidad Sostenible y Descarbonizada, la iniciativa busca priorizar modos de transporte activos y de bajas emisiones, reflejando un compromiso con la transformación del modelo de movilidad urbana y la creación de un entorno más amigable con el medio ambiente.

El artículo 3 está orientado hacia una movilidad sostenible y segura, enfocándose en corredores verdes y la construcción de infraestructuras clave como líneas de metro y cables aéreos.

Artículo 3. Políticas de largo plazo del ordenamiento territorial del Distrito Capital: (...)2. Política de Movilidad Sostenible y Descarbonizada. Se orienta a privilegiar los desplazamientos en modos de transporte activos, de cero y bajas emisiones. El eje estructurador de la movilidad es el peatón y el desarrollo de un sistema de corredores verdes de alta y media capacidad, que cambien el modelo la movilidad urbana, descarbonicen el sistema de transporte público, conecten la ciudad con la región, soporten una ciudad de proximidad, cuidadora e incluyente, mejoren las condiciones de accesibilidad de las zonas de origen informal e incorpore el desarrollo orientado al transporte y la revitalización alrededor de las infraestructuras de movilidad. Esta Política se soporta en la construcción de cinco líneas de metro, dos regiotram y siete cables aéreos, que junto con la consolidación de corredores verdes y una red de infraestructura peatonal y de cicloinfraestructura buscan establecer una movilidad sostenible y segura en el marco de la descarbonización de los viajes en el Distrito capital.” (Subrayado fuera de texto)

El artículo 103 concreta principios rectores en el componente urbano, enfatizando el impulso del uso de la bicicleta mediante la implementación de la Ciclo-Alameda del Medio Milenio y la expansión de cicloalamedas.

“Artículo 103. Principios rectores del ordenamiento en el componente urbano. Los principios rectores del ordenamiento territorial de Bogotá, definidos en el componente general, se concretan en estrategias, proyectos y medidas normativas que, en el suelo urbano, apuntan a los siguientes objetivos: (...) 4. Impulsar, aún más, el uso de la bicicleta, generando mejores condiciones (facilidad de uso, continuidad, seguridad vial y seguridad en general) para su adopción, como medio de transporte, por mujeres, personas mayores, niños y niñas, a través de:

- a. *La implementación de la Ciclo-Alameda del Medio Milenio y la consolidación de una red de cicloalamedas con la cualificación de la existente Ciclo-Alameda del Porvenir, como ejes articuladores del transporte en bicicleta y otros modos de micromovilidad.*
- b. *Más cicloparqueaderos de uso público y privado y fácilmente accesibles.*
- c. *Cicloinfraestructura adicional a implementar en la ciudad.”.*

VII. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1º del artículo 12:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

“Artículo 12. Atribuciones. *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:*

1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.”*

De igual forma, el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 confiere al alcalde Mayor la atribución de “Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos”. De esta manera, el presente Proyecto de Acuerdo establece un marco general, dejando a cargo del gobierno distrital, en el ejercicio de su capacidad reglamentaria, desarrollar y poner en práctica lo dispuesto en esta iniciativa normativa.

VIII. IMPACTO FISCAL

El artículo 7 de la Ley 819 de 2003, establece lo siguiente:

“Artículo 7. Análisis del impacto fiscal de las normas. *En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.*

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. (...)”

Y el Acuerdo 741 de 2019 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá), en su Capítulo IX, Artículo 67, indica que los proyectos de acuerdo deben contener requisitos mínimos, en los que se incluye en el literal d. Análisis del impacto fiscal del proyecto.

El presente proyecto se encuentra en línea con el programa "Al trabajo en bici" del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, mediante el cual el Distrito promueve e incentiva el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible entre los funcionarios públicos. Si bien la iniciativa busca fomentar esta práctica entre los funcionarios distritales, no implica la ejecución de nuevos gastos o reducción de ingresos que afecten el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Los lineamientos y estrategias planteadas se enmarcan en la política pública distrital de movilidad sostenible y uso de la bicicleta, por lo que su implementación se realizará con los recursos humanos y presupuestales actuales de las entidades competentes. En consecuencia, el proyecto no requiere concepto previo de la Secretaría Distrital de Hacienda al no representar impacto fiscal adicional.

IX. REFERENCIAS

Alcaldía de Bogotá. (2019). Infraestructura para bicicletas en Bogotá. Recuperado de <https://bogota.gov.co/>

BID. (2015). Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta. BID.

Encuesta de Movilidad. (2019). Resultados preliminares Encuesta de Movilidad 2019. Bogotá: Secretaría Distrital de Movilidad.

Encuesta Multipropósito. (2017). Movilidad en bicicleta en Bogotá. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación.

Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

SDE-DEDE. (2019). Caracterización de la economía de la bicicleta en Bogotá. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Universidad Libre. (2018). Caracterización de biciusuarios en Bogotá. Bogotá: Universidad Libre.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

H. Concejal de Bogotá D.C.
Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO N° 876 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA EL USO DE LA BICICLETA EN LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1º. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto fortalecer e incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible entre los funcionarios públicos que laboran en las entidades distritales, promoviendo así un entorno laboral más saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Artículo 2º. Beneficios e incentivos. Con el propósito de fomentar el uso de la bicicleta, las entidades distritales otorgarán a los funcionarios públicos que se desplacen en bicicleta a su lugar de trabajo, el beneficio de un permiso remunerado de un (1) día laboral por cada treinta (30) días laborables efectivos trabajados.

Adicionalmente, se establecerán convenios con establecimientos autorizados para ofrecer descuentos en la adquisición de bicicletas y accesorios, facilitando así la movilidad en bicicleta.

Parágrafo Primero. Las condiciones y procedimientos para acceder a estos beneficios serán reglamentados por cada entidad, garantizando equidad y transparencia en su aplicación.

Parágrafo Segundo. En cualquier circunstancia, el beneficio del permiso remunerado no podrá exceder los límites establecidos en la Ley 1811 de 2016.

Artículo 3º. Infraestructura e instalaciones. Las entidades públicas deberán adecuar sus espacios, asegurando condiciones de comodidad y seguridad para los funcionarios que utilicen la bicicleta como medio de transporte. Se priorizará la creación de áreas de estacionamiento seguro para bicicletas y vestuarios, incentivando así el uso de este medio de movilidad.

Artículo 4º. Capacitación y comunicación. La Secretaría Distrital de Movilidad y las entidades distritales implementarán programas de capacitación y comunicación dirigidos a los funcionarios públicos. Estos programas abordarán los beneficios del uso de la bicicleta, proporcionarán información sobre incentivos, ofrecerán recomendaciones técnicas y presentarán la normatividad existente para promover y facilitar la movilidad en bicicleta.

Artículo 5º. Participación en actividades. Las entidades distritales fomentarán la participación de sus funcionarios en eventos y campañas comunitarias que promuevan el uso de la bicicleta y la movilidad sostenible.

Facilitarán la asistencia de los servidores públicos a estas actividades, brindarán apoyo logístico a los organizadores según sus capacidades, y reconocerán la participación destacada de funcionarios que contribuyan a generar conciencia ciudadana sobre los beneficios de la bicicleta.

Las entidades coordinarán su respaldo a dichas iniciativas, garantizando su integración constructiva a la gestión institucional y fortaleciendo así la cultura ciclista en la ciudad.

Artículo 6º. Seguimiento. La Secretaría Distrital de Movilidad realizará seguimiento semestral al cumplimiento de este Acuerdo. Se presentará un informe semestral detallado al Concejo de Bogotá sobre los avances y resultados obtenidos, con el objetivo de evaluar la efectividad de las medidas implementadas.

Artículo 7º. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y Cúmplase

PROYECTO DE ACUERDO N° 877 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA DE TALENTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, "BOGOTÁ, LA CAPITAL DEL TALENTO INFANTIL" EN EL DISTRITO CAPITAL"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto impulsar la participación activa y la visibilización de los talentos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diversos campos artísticos, culturales, científicos, deportivos y tecnológicos, para su desarrollo integral y reconocimiento en la sociedad se a través de la creación de la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil" como un evento de interés cultural de carácter distrital.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado. (...) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños. la vida, la integridad física, la salud, (...) la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. (...) Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Artículo 71. Expresión Artística. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

De orden legal:**Ley 1098 DE 2006. “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”**

ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN AMBIENTE SANO. (...) La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano.

PARÁGRAFO. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia.

De orden Distrital:**DECRETO 340 DE 2020 POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES:**

Artículo 1. Naturaleza. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, perteneciente al Sector Cultura, Recreación y Deporte, es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera.

Artículo 2. Objeto. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella adscritas y vinculada y la sociedad civil.

Artículo 3. Funciones. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, tendrá las siguientes funciones básicas:

- a. Formular estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica.*
- b. Diseñar estrategias de divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible.*

(...)

DECRETO 599 DE 2013 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO, LA EVALUACIÓN Y LA EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN PARA EL REGISTRO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL –SUGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”:

Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto:

- 1. Establecer el funcionamiento e integración del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital, en adelante y para efectos de lo previsto en este decreto se denominará - SUGA y se adopta la ventanilla única virtual.

2. Crear el Comité del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital - SUGA y establecer sus funciones.

3. Determinar las características y clasificación de las aglomeraciones de público, así como los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las actividades que impliquen aglomeraciones de público en el Distrito Capital, a través de la ventanilla del SUGA. Así como los procedimientos que se deben observar para la habilitación de escenarios de artes escénicas.

4. Establecer los requisitos y procedimiento para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados, en espacio público, en estadios y demás escenarios deportivos.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

A nivel nacional y distrital, se han implementado diversas estrategias para fomentar las habilidades y potencialidades de aquellos individuos destacados que, debido a sus características particulares, requieren de una orientación y apoyo específicos. En este contexto, la ciudad de Bogotá debe estimular estos talentos en niños, niñas y adolescentes para asegurar su pleno desarrollo.

“Todo colegio tiene estudiantes que poseen elevado potencial para el aprendizaje en niveles avanzados, la solución de problemas creativos y la motivación para seguir un trabajo de excelencia y rigor. Más que fuentes de adquisición de información, los colegios deben ser lugares para el desarrollo de talentos en todos sus estudiantes. (...) Los métodos tradicionales de escolaridad pueden llevar al fracaso la intención de hacer de los colegios lugares de desarrollo de experiencias enriquecedoras para el talento creativo de los jóvenes. (...) El Modelo de Enriquecimiento Escolar comprende estrategias para incrementar el esfuerzo del estudiante, su gozo y desempeño, así como para integrar un rango de experiencias de aprendizaje de nivel avanzado, junto con destrezas de pensamiento, en todas las áreas curriculares.”⁷

Las actividades lúdicas, cuando se integran en el ámbito distrital, se convierten en una herramienta fundamental para acercar a los niños a aprendizajes significativos en entornos agradables y atractivos. Esto favorece el desarrollo de sus habilidades de manera natural. Como resultado, se generan niños felices, con habilidades fortalecidas, afectuosos, dispuestos a participar en el aula, curiosos y creativos. Estos ambientes también promueven la ampliación del vocabulario y mejoran la convivencia, lo que, a su vez, capta el interés de las familias, incentivando su participación en eventos de la comunidad.

Es vital considerar la feria lúdico-pedagógica como un espacio adecuado para reflexionar sobre los métodos, significados y didácticas involucrados en los procesos educativos y de formación infantil. Además, ofrece una oportunidad para analizar críticamente los aprendizajes de los estudiantes de la licenciatura en educación. Bajo estas circunstancias, el análisis en torno a la feria lúdico-pedagógica permite profundizar en las competencias que deben desarrollar los futuros profesionales de la educación, entendiendo que una formación coherente de los educadores de la etapa infantil contribuye de manera significativa al desarrollo integral de la primera infancia.

⁷ S. Renzulli, Joseph. (2008). *La educación del sobredotado y el desarrollo del talento para todos*. Revista de Psicología, vol. XXVI, núm. 1. Pontificia Universidad Católica del Perú Lima, Perú.

En Bogotá, aunque existen numerosos eventos masivos que buscan integrar y destacar talentos y habilidades en diversas áreas, muchos de ellos carecen de una participación integral de niños, niñas y adolescentes. Estos eventos suelen centrarse en el público adulto o en competencias específicas que no siempre consideran el potencial y las capacidades de los más jóvenes.

La falta de inclusión de niños, niñas y adolescentes en estos eventos representa una oportunidad perdida para fomentar su desarrollo y visibilizar su creatividad, talento y habilidades. Bien lo ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia C-449-03 al precisar la importancia que tiene la actividad recreativa y deportiva en el desarrollo integral del ser humano y en la promoción social de la comunidad, la cual se destaca en mayor medida el propio ordenamiento Superior al reconocer expresamente que dicha actividad reviste el carácter de derecho fundamental y prevalente en el caso de los niños. Por lo tanto, integrar a este grupo en la programación de eventos masivos no sólo enriquecerá la experiencia colectiva, sino que también permitirá construir una sociedad más equitativa, donde se valore y promueva el aporte de las nuevas generaciones en todos los ámbitos de la cultura, el deporte, el arte y la tecnología.

Como sucede con el *Festival de Talentos 'Jóvenes capaces' con más de 10.000 estudiantes*. El evento se desarrolla en una jornada única con 210 instituciones educativas con una participación de 132.712 estudiantes, y la jornada extendida se implementa en 305 colegios con una participación de 281.691 niños y jóvenes. Alrededor de 30 actividades se desarrollarán en estos días en torno al arte, ciencia, cultura y deporte en 10 escenarios de la ciudad.

También es el caso de la Feria de Talentos para habitantes de calle, que cuenta con la participación de más de 40 habitantes de calle de la zona norte de la capital. Se desarrolla en medio de la "Jornada de Desarrollo Personal", en la que se realizan diferentes actividades lúdicas, pedagógicas y rumba aeróbica entre otras actividades programadas en el Centro de Desarrollo Comunitario, de la subdirección local de la Secretaría de Integración Social, en Usaquén.

Por último, como sucede con la Feria de talentos y productividad con centenarios y personas mayores de Ciudad Bolívar. El evento se realiza en el marco de la celebración del "Mes del Envejecimiento y la Vejez", en la localidad de Ciudad Bolívar.

En ese sentido, el proyecto busca integrar a niños, niñas y adolescentes de todas las localidades de Bogotá en la participación de un evento masivo, donde tengan la oportunidad de mostrar sus habilidades y talentos. Este enfoque inclusivo pretende no solo visibilizar las capacidades de los jóvenes, sino también proporcionarles un espacio seguro y significativo para expresar su creatividad y potencial.

El propósito principal de este proyecto es incentivar el crecimiento personal y profesional de los participantes, promoviendo un sentido de pertenencia y confianza en sus propias habilidades. Al brindarles la oportunidad de ser protagonistas en un evento de gran magnitud, se les motiva a seguir desarrollando sus talentos, lo cual contribuirá positivamente a su formación integral y a la construcción de un futuro lleno de oportunidades.

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia realiza una descripción del derecho a desarrollarse desde la primera infancia con los ODS de la siguiente forma:

Los 17 ODS y sus 169 metas impactan de manera directa o indirecta en el bienestar de la infancia y su implementación representa una clara apuesta por un modelo social y político que ponga en el centro a los niños. Además, la Agenda 2030 ayuda a ampliar la mirada hacia nuevas dimensiones del bienestar infantil asociadas con la equidad, el desarrollo económico, el medio ambiente y el cambio climático, la promoción de la paz y la protección. Garantizar el bienestar y la realización de los derechos de la infancia no es sólo un compromiso de los países que han suscrito la CDN, sino también una condición esencial para alcanzar los ODS para todos. (UNICEF, 2024)

El bienestar infantil es un pilar fundamental para el éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La implementación de la Agenda 2030 no solo refuerza el compromiso global con los derechos de los niños, sino que también subraya que sin asegurar su bienestar, es imposible lograr un desarrollo sostenible integral. Los ODS proporcionan un marco amplio que integra diversas dimensiones cruciales para el desarrollo infantil, lo que resalta la importancia de poner a los niños en el centro de las políticas y acciones globales.

- *El derecho a alcanzar el máximo potencial en la vida es igual para todos los niños y niñas del mundo.*
- *Hay contextos sociales y económicos que lo dificultan, más allá de las posibilidades de cada niño o niña y su familia.*
- *La pobreza y la dificultad de acceso a un trabajo decente impiden a muchas familias lograr un desarrollo pleno para sus hijos.*

Es importante que el distrito se acoja a la Agenda 2030 porque al hacerlo, se compromete a un conjunto de metas globales que no solo buscan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos en general, sino que también colocan un énfasis particular en el bienestar infantil. Adoptar esta agenda significa que el distrito prioriza la equidad, el desarrollo sostenible, la protección ambiental, la paz y los derechos humanos, con un enfoque especial en los niños como futuros ciudadanos. Esto no solo mejora el presente y futuro de los niños del distrito, sino que también asegura un desarrollo más equilibrado y sostenible para toda la comunidad. Además, al alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el distrito contribuye a los esfuerzos globales para combatir problemas como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, lo que tiene un impacto positivo tanto a nivel local como mundial.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027”

El proceso pedagógico permite garantizar un fortalecimiento de ambientes educativos que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Esto implica contar con un equipo humano altamente cualificado que trabaje en condiciones de calidad y pertinencia, lo que asegura que cada niño y niña reciba una educación adaptada a sus necesidades y potencialidades. Un ambiente pedagógico y cultural bien diseñado no solo se enfoca en la transmisión de conocimientos, sino que también fomenta el crecimiento emocional, social y cognitivo de los NNA, creando una base sólida para su futuro desarrollo académico y personal.

Las propuestas curriculares y pedagógicas centradas en las capacidades y potencialidades de los niños y niñas son esenciales para el desarrollo de habilidades en áreas clave como el juego, el arte, la literatura y los lenguajes expresivos. Estas áreas permiten a los estudiantes explorar su creatividad, mejorar su capacidad de comunicación y fortalecer su pensamiento crítico. Así, el presente proyecto de acuerdo se alinea con las metas y propuestas del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, creando una feria de talentos con el propósito de formar individuos más completos y capaces de enfrentar los desafíos del mundo moderno:

Artículo 12. Programas del objetivo estratégico “Bogotá confía en su potencial”.
Adóptense los siguientes programas del objetivo “Bogotá confía en su potencial”:

12.1. Programa 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. (...)

En cuanto a jornadas complementarias, se adelantará un trabajo articulado con distintos aliados, como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidades adscritas, gracias al cual los niños, niñas y jóvenes de la ciudad tendrán acceso a espacios de formación artísticos y deportivos garantizando una formación integral.

(...)

16.5. Programa 36. Innovación Pública para la generación de la confianza ciudadana. (...) *Adicionalmente, en colaboración con IBO y las Secretarías de Planeación, Educación, Integración Social y Gobierno, se generarán líneas de trabajo con niños, niñas y adolescentes en espacios de cocreación y laboratorios de innovación que incentivan su participación incidente y formación en innovación pública.*

(...)

Artículo 122. Coordinación interinstitucional para la atención integral a la primera infancia. (...) *La gestión intersectorial para la atención integral tendrá como propósito orientar acciones conjuntas, articuladas e intencionadas por parte de todos los actores corresponsables en el territorio distrital, esto en función de garantizar que todos los niños y niñas entre los cero (0) y los cinco (5) años en Bogotá D.C. se vinculen en condiciones de igualdad, equidad y calidad a los distintos programas y modalidades de atención integral a la primera infancia (AIPI) de carácter oficial o privado que sean prestados por parte de la oferta del Distrito Capital o el ICBF.*

Proceso Pedagógico- *Diseño y fortalecimiento de ambientes educativos y pedagógicos que favorezcan el desarrollo de las niñas y niños con equipo humano cualificado y en condiciones de calidad y pertinencia. - Propuestas curriculares y pedagógicas centradas en las capacidades y potencialidades de los niños y niñas - Desarrollo de capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y los lenguajes expresivos. (...)*

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

VII. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

El presente proyecto no genera ningún impacto fiscal adicional, solo traza una ruta adicional dentro del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2024-2027 y el Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la cual puede llevarse a cabo con el presupuesto actual.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

H. Concejal de Bogotá D.C.

Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO N° 877 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA DE TALENTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, “BOGOTÁ, LA CAPITAL DEL TALENTO INFANTIL” EN EL DISTRITO CAPITAL”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto crear la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil" como un evento de interés cultural de carácter distrital, cuyo propósito es impulsar la participación activa y la visibilización de los talentos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diversos campos artísticos, culturales, científicos y tecnológicos, promoviendo así su desarrollo integral y su reconocimiento en la sociedad.

Artículo 2. Aplicación. La Administración Distrital, en coordinación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se encargará de la organización y logística de la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil". Esta feria se llevará a cabo anualmente.

Artículo 3. Articulación con el Sector Privado. La Administración Distrital vinculará al sector privado y creará alianzas con diversos sectores, como el entretenimiento y el deporte, con el objetivo de captar ofertas educativas para los niños, niñas y adolescentes que por su talento se destaquen en la Feria.

Artículo 4. Reglamentación. La administración distrital reglamentará el presente acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación, estableciendo los espacios, tipos de actividades y participación que permitan la realización de la Feria de Talentos "Bogotá, la Capital del Talento Infantil" en el Distrito Capital.

Artículo 5. Vigencia. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su promulgación.

Publíquese y Cúmplase

PROYECTO DE ACUERDO N° 878 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo establecer beneficios tributarios para los propietarios o poseedores de inmuebles comerciales afectados por la ejecución de obras públicas en el Distrito Capital de Bogotá. A través de la exención del impuesto predial durante el período de afectación, se busca aliviar las cargas económicas que dichas obras generan en los contribuyentes, brindando un alivio fiscal mientras persista la afectación.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

ARTÍCULO 1: *“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”*

ARTÍCULO 317. *Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. (...)*

ARTÍCULO 338: *“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.”*

De orden legal:

LEY 1386 DE 2010: *por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones*

LEY 788 DE 2002: *Las entidades territoriales pueden disminuir las sanciones y simplificar*

De orden Distrital:

DECRETO 352 DE 2002 *"por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital".*

DECRETO 807 DE 1993 *"por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones".*

DECRETOS DISTRITALES 601 DE 2014 y 777 DE 2019: (...)

RECAUDA: *Registra y legaliza los recaudos de ingresos corrientes tributarios y no tributarios, recursos de capital y transferencias al D.C. a las cuentas bancarias que administra, para generar información oportuna y confiable, así como establecer la disponibilidad de los recursos.*

PAGA: *Realiza la disposición y el giro de recursos para cumplir con compromisos distritales según la orden que le imparten las entidades distritales ejecutoras.*

ADMINISTRA EL PORTAFOLIO DISTRITAL: *Realiza el manejo y negociación de las inversiones según las normas vigentes, nacionales y distritales y las políticas hacendarias."*

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La construcción de obras civiles tiene un impacto significativo en la vida diaria de los ciudadanos y comerciantes de una comunidad. Desde la planificación hasta la finalización de un proyecto de construcción, las personas se ven afectadas de diversas maneras. El propósito de este trabajo es analizar en detalle cómo estas obras impactan en la vida de los ciudadanos y comerciantes, considerando aspectos como la movilidad, el acceso a servicios, el medio ambiente, la economía local y la calidad de vida en general.

Se explorarán casos específicos de obras civiles y cómo éstas han afectado a las comunidades circundantes, destacando tanto los aspectos positivos como los desafíos y dificultades que enfrentan los residentes y los empresarios. Además, se examinarán posibles soluciones y buenas prácticas que puedan minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios para todos los involucrados con exención de impuestos al contribuyente. Este análisis permitirá comprender mejor la complejidad de las obras civiles y cómo estas influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos y comerciantes en una comunidad.

Ahora bien, en la actualidad las obras que se encuentran en ejecución no tienen un avance significativo, a pesar de haber tenido el Plan de Desarrollo de Claudia Lopez, lo único que se logró completar fue la firma de los contratos. Por tanto, este es el caso de las metas relacionadas con la construcción de espacio público y ciclorrutas, las cuales se ejecutan mayormente dentro de proyectos de intervención integral, como las troncales y vías de la malla vial principal. En estos proyectos, se realizan obras que abarcan dentro el avance de otros proyectos. Por tanto, el progreso físico de estas metas depende de la finalización y entrega de las obras viales. En consecuencia, continuarán en ejecución al concluir la presente administración y el Plan de Desarrollo.

No Meta PDD	Meta PDD	Unidad	Meta PDD- IDU	TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA PDD (corte jun-2023)	% EJECCIÓN ACUMULADA PDD (corte jun-2023)	Proyección Ejecución (corte 2023)	% Proyección Ejecución (corte 2023)	Proyección Total Contratado PDD (31 May 2024)	% Proyección Total Contratado PDD (31 may 2024)
240	240 Conservar 1.505.155 m2 espacio público (IDU 1.405.155, UMW 1.000.000)	M2	1.405.155,00	1.295.098,56	92%	1.729.910,49	123%	1.931.303,57	137%
241	241 Construir 2.718.592 m2 espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	M2	2.718.592,00	582.950,73	21%	1.092.979,73	40%	2.910.650,69	107%
242	242 Construir o reforzar 135 Puentes peatonales	Pte P. Construido	15,00	2,00	58%	5,00	83%	26,00	107%
		Pte P. Mantenido	120,00	76,00		107,00		119,00	
376	376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	Cable	0,60	-	0%	0,02	78%	0,60	100%
		Estructuración	2,00	-		2,00		2,00	
377	377 Conservar 190 km de cicloinfraestructura (IDU 110, UMW 80)	Km ciclorrutas	110,00	61,02	55%	76,90	70%	92,96	85%
378	378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km. de malla vial (IDU938) (UMV1370)	Km-carril	938,00	678,01	72%	852,45	91%	1.008,67	108%
380	380 Construir 146 km-carril de malla vial. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	Km-carril	146,00	91,58	63%	153,07	105%	440,68	302%
381	381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura (224 IDU, 56 SOM)	Km ciclorrutas	224,00	26,38	12%	48,50	22%	170,40	76%
382	382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel	Pte V. Construido	17,00	1,00	3%	6,00	52%	33,00	152%
		Pte V. Reforzado	12,00	-		9,00		11,00	
383	383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	Estrategias	0,25	-	0%	0,25	100%	0,25	100%
388	388 Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos	Cicloparqueadero	5.000,00	1.703,00	34%	4.327,00	87%	7.024,00	140%
392	392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	Km-carril	360,00	359,00	100%	378,56	105%	457,56	127%
393	393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio	Estaciones	43,00	26,00	60%	32,00	74%	42,00	98%
396	396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	Patios	6,00	3,00	50%	4,00	67%	6,00	100%
397	397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29,6 km de corredores de transporte masivo	Km	29,60	6,90	23%	16,81	57%	46,03	156%
398	398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	Km	20,00	-	0%	-	0%	20,00	100%
402	402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur	Implementación	1,00	-	67%	1,00	100%	1,00	100%
		Estructuración	2,00	2,00		2,00		2,00	
482	482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales.	%	93,59	94,78	101%	93,59	100%	93,59	100%
483	483 Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para la entidades del sector Movilidad, en el marco de la Política de MIPG.	%	84,40	91,50	108%	84,40	100%	84,40	100%

Fuente: Informe de gestión y resultados del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 2023

Frente a esta situación, en Bogotá, las obras civiles ejecutadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tienen un impacto significativo sobre la propiedad privada de los ciudadanos y comerciantes, particularmente en términos de adquisición y reubicación de predios. Durante los últimos años, el IDU ha avanzado en la compra de más de 3,800 predios para la construcción de proyectos viales estratégicos, de los cuales 2,896 ya han sido adquiridos. Estos incluyen áreas claves como la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali, que concentran un alto volumen de expropiaciones necesarias para el avance de la infraestructura de movilidad. El proceso afecta a propietarios y comerciantes, quienes deben ceder sus terrenos, en muchos casos con la promesa de compensaciones económicas basadas en avalúos comerciales.

Sin embargo, la expropiación de predios puede tener consecuencias negativas para los afectados, en particular para los pequeños comerciantes, quienes ven afectadas sus fuentes de ingresos debido a las demoliciones y alteraciones del entorno comercial. En varios casos, como en los tramos de Transmilenio, se ha reportado una disminución del comercio local y un incremento en la percepción de inseguridad debido a la falta de planeación adecuada en la reutilización de los espacios. Estos problemas se agravan cuando los terrenos expropiados no se utilizan de inmediato, generando áreas abandonadas que empeoran la dinámica comercial y social.

El IDU ha intentado mitigar estos efectos mediante compensaciones justas y la planeación a largo plazo de los usos de los predios. Sin embargo, se requiere un esfuerzo adicional para asegurar que la adquisición de los predios, que puede afectar más de 1,300 propiedades, se lleve a cabo de manera equitativa y con planes claros para la reactivación de las zonas afectadas.

La implementación de descuentos en el impuesto predial para los inmuebles afectados por obras civiles en Bogotá es una medida viable para compensar los impactos negativos que estas intervenciones pueden generar en propietarios y comerciantes. Las obras de infraestructura, como la construcción de troncales o ampliaciones viales, a menudo implican alteraciones significativas en el entorno urbano, que pueden afectar tanto el valor comercial de las propiedades como la calidad de vida de sus residentes. Establecer descuentos en el impuesto predial para los inmuebles que se encuentran dentro de los polígonos de intervención no solo sería una forma de aliviar la carga financiera de los afectados, sino también de generar un mayor sentido de justicia en los procesos de renovación urbana.

La propuesta de descuentos en el impuesto predial se puede fundamentar en la lógica de compensación por los perjuicios temporales derivados de las obras. Durante el tiempo en que una zona está intervenida, los inmuebles suelen ver afectada su valorización debido a la reducción en la accesibilidad, el ruido y la disminución de clientes para los comercios. En muchos casos, el valor del inmueble baja mientras se realizan las obras, pero los propietarios continúan pagando un impuesto predial calculado con base en un valor catastral que no refleja estas circunstancias. Reducir este impuesto hasta la finalización de las obras permitiría equilibrar las cargas y proteger la estabilidad económica de los propietarios afectados.

Además, esta medida incentivaría un mayor apoyo ciudadano a los proyectos de infraestructura pública, los cuales, si bien son necesarios para el desarrollo de la ciudad a largo plazo, pueden enfrentar resistencia debido a los inconvenientes que causan durante su ejecución. Al ofrecer descuentos en el impuesto predial, las autoridades demostrarían una mayor sensibilidad ante las preocupaciones de la ciudadanía y contribuirían a generar una percepción más favorable de estos proyectos. Esto, a su vez, podría acelerar los procesos de adquisición de predios y disminuir las tensiones entre la Administración Distrital y los contribuyentes afectados, promoviendo una mayor colaboración en la ejecución de los proyectos de ciudad.

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Los ingresos fiscales son fundamentales para que Bogotá pueda llevar a cabo proyectos clave que impulsen el desarrollo urbano y social, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La recaudación proveniente de la tributación directa e indirecta permite a la administración distrital financiar obras de infraestructura, movilidad, espacio público y programas sociales. En los últimos años, Bogotá ha implementado acuerdos y políticas fiscales que buscan no solo mejorar la recaudación a través de los pagos de valorización, sino también garantizar que estos ingresos se inviertan en proyectos sostenibles y equitativos. Entre estas políticas destacan iniciativas que promueven el desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos a través de la modernización de la infraestructura vial, la construcción de ciclorrutas y la expansión de sistemas de transporte público más eficientes y amigables con el medio ambiente.

“Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”

“Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”

“Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países”

“De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional”

“Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”

Sin duda, los proyectos de infraestructura en Bogotá deben procurar el menor impacto posible en la calidad de vida de los ciudadanos mientras se desarrollan. Para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, al mismo tiempo, salvaguardar el bienestar de los habitantes afectados por estas obras, es necesario implementar mecanismos que proporcionen alivios fiscales. Estos alivios tributarios, como descuentos en el impuesto predial o reducciones en otros tributos locales, permitirían que los propietarios y comerciantes afectados por las intervenciones mantuvieran una estabilidad económica durante la ejecución de las obras.

Propuestas como la exoneración parcial de impuestos a quienes se vean directamente afectados por demoras, ruidos, cierres viales u otros inconvenientes temporales contribuirían a equilibrar el impacto negativo de las intervenciones urbanísticas. Este tipo de incentivos permitiría que los proyectos avanzaran de manera óptima, mitigando las tensiones entre la administración y los ciudadanos, y garantizando que la ciudad avance hacia el cumplimiento de los ODS sin sacrificar la calidad de vida de quienes habitan las áreas intervenidas.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027”

ARTÍCULO 316. *Alivios tributarios para obligaciones tributarias susceptibles de discusión. Reglamentado por el art. 1, Acuerdo Distrital 236 de 2024. Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios de los tributos distritales, que a la fecha de publicación del presente acuerdo tengan obligaciones tributarias en mora y respecto de las cuales no se haya proferido liquidación oficial o que, habiéndose proferido no se encuentren en firme, podrán descontar el ochenta por ciento (80%) de los intereses y sanciones causados, siempre que, a más tardar el 13 de diciembre de 2024, paguen el ciento por ciento (100%) del capital adeudado y el veinte por ciento (20%) de los intereses y sanciones causados a la fecha de pago.*

Tratándose de sanciones por no envío de información, el responsable podrá descontar el ochenta por ciento (80%) del valor adeudado siempre que, a más tardar el 13 de diciembre de 2024, pague el veinte por ciento (20%) de la sanción liquidada a esa fecha. Tratándose de sanciones propuestas o determinadas por la Administración Tributaria Distrital que no se encuentren en firme, deberá acreditarse el pago del veinte por ciento (20%) señalado en el respectivo acto administrativo.

(...)

Implementar un beneficio de exención tributaria para quienes estén al día con sus pagos incentivaría tanto el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales como la cancelación de deudas pendientes, fortaleciendo las finanzas del distrito. Esta estrategia actuaría como un incentivo directo, motivando a los contribuyentes a mantenerse al corriente para aprovechar la exoneración de ciertos tributos o parte de ellos, lo que podría aliviar su carga financiera.

Al ofrecer este tipo de incentivos, se estimularía el flujo de ingresos tributarios que son esenciales para alcanzar las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. El distrito contaría con más recursos de manera constante, lo que permitiría financiar proyectos de infraestructura, programas sociales y obras públicas, como aquellas relacionadas con el espacio público y la movilidad.

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

VII. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 7o, establece que el impacto fiscal de todo Proyecto de Acuerdo debe ser explícito y compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual en la respectiva Exposición de Motivos deberán incluirse expresamente los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional que se generaría para financiar tales costos.

Conforme lo anterior, este proyecto de acuerdo tendría un impacto fiscal toda vez que las disposiciones propuestas se refieran específicamente a beneficios tributarios mediante descuentos en el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio, lo cual afectaría el recaudo programado para las vigencias fiscales 2024-2027. En este caso, los costos relacionados con la implementación de esta iniciativa requieren ser cuantificados y evaluados previamente por parte de la Administración Distrital. Sobre este asunto, se sugiere que la Secretaría Distrital de Hacienda pueda pronunciarse durante la discusión de esta iniciativa con el fin de conocer el respectivo impacto fiscal y el concepto previo de viabilidad de las respectivas propuestas, toda vez que esta iniciativa es competencia de la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. al tratar asuntos de carácter tributario.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

H. Concejal de Bogotá D.C.
Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO N° 878 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto establecer beneficios tributarios a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles comerciales afectados por la ejecución de obras públicas en el Distrito Capital de Bogotá, mediante la exención del pago del impuesto predial durante el tiempo que dure la afectación.

Artículo 2. Definición de afectación por obras públicas. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá como inmueble afectado aquel que, por motivo de la ejecución de obras públicas, enfrente limitaciones en su uso, acceso y/o aprovechamiento económico, y que cuente con una declaración de afectación expedida por la entidad competente mediante acto administrativo.

Artículo 3. Alcance. Los beneficios establecidos en este acuerdo serán aplicables a todos los inmuebles comerciales ubicados en el Distrito Capital de Bogotá que se vean afectados por obras públicas, según lo determine la autoridad competente.

Artículo 4. Procedimiento. Los propietarios o poseedores de inmuebles comerciales afectados por obras públicas deberán presentar una solicitud escrita ante la Secretaría Distrital de Hacienda para acceder a la exención del impuesto predial. Esta solicitud deberá incluir el acto administrativo expedido por la entidad competente que declare la afectación del inmueble. La Secretaría Distrital de Hacienda verificará la validez de la documentación presentada y, de cumplirse los requisitos, expedirá una resolución de exención aplicable al período fiscal correspondiente.

La Administración Distrital reglamentará los requisitos que deben acreditar los contribuyentes para acceder a esta exención.

Parágrafo. La exención se renovará automáticamente cada año mientras permanezca vigente el acto administrativo que certifique la afectación. En caso de que la situación de afectación cese, la exención será revocada de manera inmediata.

Artículo 5. Reconocimiento de exenciones. La Secretaría Distrital de Hacienda, deberá verificar si el contribuyente cumple con los requisitos para acceder al beneficio del no pago del impuesto predial unificado, siempre y cuando se encuentre al día en el pago por concepto de impuestos distritales o demás obligaciones tributarias.

Parágrafo. Los pagos efectuados antes de declararse la exención no serán objeto de devolución o compensación.

Artículo 6. Tiempo. La exención del impuesto predial será aplicable durante el período en el que la afectación permanezca vigente, conforme lo determine el acto administrativo expedido por la autoridad competente.

Parágrafo. El plazo para presentar la solicitud de exención será de 90 días contados a partir de la expedición del acto administrativo de afectación. En caso de que el solicitante no presente la solicitud dentro de este plazo, perderá el derecho a solicitar la exención para el período fiscal en curso.

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO N° 879 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDEN LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS Y SOCIALES OTORGADOS POR EL DISTRITO CAPITAL A AQUELLOS CIUDADANOS BENEFICIARIOS QUE ESTÉN SIENDO INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS O CONTRAVENCIONES EN EL MARCO DE UNA MANIFESTACIÓN PÚBLICA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto la suspensión de beneficios educativos y sociales otorgados por el Distrito Capital a aquellos ciudadanos beneficiarios que estén siendo investigados por la comisión de delitos o contravenciones en el marco de una manifestación pública.

SUSTENTO JURÍDICO DEL PROYECTO

ORDEN CONSTITUCIONAL

Constitución política de Colombia

- Art. 2: *“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”*

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”⁸

- Art 13: *“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”⁹*

⁸ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 2.

⁹ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 13.

- Art. 15: *“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.”*¹⁰
- Art. 16: *“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.”*¹¹
- Art. 29: *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.”*
- Art. 58: *“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.”*^{12 13}
- Art. 95, numeral 8: *“... Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano ...”*¹⁴

Bloque de Constitucionalidad

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: *“Art. 17: 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”*¹⁵
- Pacto de San José: *“Art. 21: Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes (...) 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.”*¹⁶

¹⁰ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 15.

¹¹ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 16.

¹² Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 58.

¹³ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 29.

¹⁴ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 95.

¹⁵ Organización de las Naciones Unidas, (1996), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

¹⁶ Convención Americana sobre Derechos Humanos, (1978), Pacto de San José.

Jurisprudencia

- Sentencia C-024-94: *“La policía, en sus diversos aspectos, busca entonces preservar el orden público. Pero el orden público no debe ser entendido como un valor en sí mismo sino como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. El orden público, en el Estado social de derecho, es entonces un valor subordinado al respeto a la dignidad humana, por lo cual el fin último de la Policía, en sus diversas formas y aspectos, es la protección de los derechos humanos. Estos constituyen entonces el fundamento y el límite del poder de policía. La preservación del orden público-lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es entonces compatible con el ideal democrático, puesto que el sentido que subyace a las autoridades de policía no es el de mantener el orden a toda costa sino el de determinar cómo permitir el más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas sin que ello afecte el orden público.”*¹⁷
- Sentencia C-742-12: *“ La Constitución rechaza expresamente el uso de la violencia dentro del marco del Estado de derecho. Cuando existen instrumentos idóneos para expresar la inconformidad, como el estatuto de la oposición, la revocatoria de mandato, el principio de la soberanía popular, el control de constitucionalidad, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares, o las **manifestaciones pacíficas**, pierden sustento los posibles motivos usados para legitimar la confrontación armada o las actitudes violentas de resistencia a la autoridad. Para la Corporación.”*¹⁸
- Sentencia T-009-92: *“los correctivos a las fallas en el manejo del poder político tienen que ser de derecho y no de hecho. La vía de hecho no puede, bajo ningún aspecto, conducir al restablecimiento del orden, no sólo por falta de legitimidad in causa para ello, sino porque siempre es, dentro del Estado de Derecho, un medio inadecuado, desproporcionado y generador de desorden.”*¹⁹

¹⁷ Corte Constitucional, 27 de enero de 1994, C-024, Colombia.

¹⁸ Corte Constitucional, 26 de septiembre de 2012, C-742, Colombia.

¹⁹ Corte Constitucional, 22 de mayo de 1992, T-009, Colombia.

- Sentencia C-009-18: *“se debe resaltar que el artículo 37 de la Constitución somete la protección de estos derechos en la esfera pública a condiciones pacíficas, lo cual excluye su ejercicio a través de medios violentos. Así, además de los mencionados elementos que son aplicables al artículo 37 de la Constitución (subjeto, temporal, finalístico y real), el ejercicio de estos derechos solo se permite en esas condiciones. En concordancia, cabe enfatizar en que el elemento finalístico reseñado, exige la licitud del objetivo de la reunión o manifestación, lo cual refuerza la condición de que los derechos se ejerzan de forma pacífica. Tal condición constituye un presupuesto del goce de estos derechos que implica que la violencia, sin importar en qué momento se produzca, si como un exceso a lo que comenzó en términos pacíficos o como el objetivo de una manifestación particular, escapa de la garantía de los derechos, al salirse de su contorno material.”*²⁰

ORDEN LEGAL

- Ley 388 de 1997: Art. 1 Numeral 3: *“Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.”*²¹
- Ley 84 de 1873: *“Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales.”*²²
- Ley 1801 de 2016: *“Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o rural tales como semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transporte, faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de basura... Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando este se requiera o incumpliendo la normatividad vigente.”*²³

²⁰ Corte Constitucional, 7 de marzo de 2018, C-009, Colombia

²¹ Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones, No. 388 de 1997 (julio 18).

²² Código Civil de los Estados Unidos De Colombia, No. 84 de 1873 (mayo 26).

²³ Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, No. 1801 de 2016 (julio 29).

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Las manifestaciones sociales son un medio de libre expresión que refleja la voluntad de la ciudadanía. Por lo general, estas expresiones se llevan a cabo siguiendo principios éticos y buenas costumbres; sin embargo, en ocasiones suelen tornarse en escenarios de violencia. Ante ello, resulta necesario que la administración intervenga para establecer límites con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudad y la integridad de sus habitantes.

El derecho a la protesta o manifestación pacífica cuenta con protección constitucional, sin embargo, las acciones que tienen como consecuencia prácticas violentas, con el supuesto propósito de hacer el reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta reprochable, no vinculan estos propósitos a la misma protección. Así lo ha manifestado la Corte Constitucional en sentencia T-122-17:

“Para la Corte, nadie puede presentarse a la justicia para pedir la protección de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no está conforme al derecho y los fines que persigue la misma norma. Este principio no tiene una formulación explícita en el ordenamiento jurídico. No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional ha hecho alusión a su naturaleza de regla general del derecho, al derivarse de la aplicación de la analogía iuris.”²⁴

Se considera entonces, desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional, que reconocer un beneficio económico en favor de un estudiante que de alguna manera haya podido causar un daño al patrimonio público y/o los bienes jurídico-tutelables (como conducta reprochable), resultaría desproporcionado y contrario a los fines constitucionales e institucionales que en su autonomía persiguen los programas académicos y sociales a cargo de las entidades distritales.

Históricamente, el derecho a la manifestación pacífica ha sido utilizado como una herramienta para generar impactos positivos frente a situaciones inciertas o acciones cuestionables por parte de la Administración Pública. Este derecho se ejerce en respuesta al exceso de poder de algunas entidades, su inactividad o la impopularidad de sus decisiones. Con motivos válidos y fundamentados, ciudadanos, simpatizantes, acompañantes, víctimas y observadores organizan reuniones para expresarse en las calles, plazas, parques, monumentos e instituciones. Su objetivo es hacer oír sus voces de manera pacífica, con el fin de evidenciar las acciones o inacción de la Administración frente al Gobierno Nacional o ante la comunidad internacional.

Pese a lo anterior, en Colombia han existido diversas manifestaciones que, bajo el pretexto del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, derivaron en escenarios violentos que ponen en riesgo a los ciudadanos. Un ejemplo de ello se constata en las manifestaciones denominadas popularmente como “*paro nacional 21N*”, realizadas de manera discontinua, entre los años 2019 y 2020, donde se evidencia cómo el ejercicio de la libre expresión fuera de los límites normativos, puede resultar en hechos violentos que se encuentran deslegitimados de protección constitucional;

²⁴ Corte Constitucional, (2017), T-222.

Así mismo, las protestas ocurridas en el año 2021 denominadas “el estallido social”, desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno de turno, llevó a los ciudadanos organizados, a salir a las calles para manifestarse en contra de lo propuesto en su momento. Sin embargo, ejecutando acciones que van en contra de la ley y el respeto sobre los bienes públicos y privados, algunos de los participantes de estas manifestaciones realizaron actos vandálicos, que resultaron en daños a nivel nacional, expuestos de la siguiente forma:

“AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA:

- 151 infraestructuras gubernamentales.
- 28 peajes.
- 4 básculas de pesajes.
- 25 bienes culturales.
- 150 cámaras de seguridad.
- 55 cámaras de foto multa.
- 111 semáforos.
- Afectación a 679 instalaciones policiales.
- 536 vehículos policiales.
- 438 establecimientos comerciales privados.
- 456 oficinas bancarias.
- 1201 vehículos de transporte público.
- 236 estaciones de transporte público.
- 21 motos particulares.
- 91 estaciones de servicios.
- 432 cajeros automáticos.

*Finalmente, en Bogotá, el sistema de transporte público Transmilenio, ha llegado a quedar afectado en un 44% con 103 de sus 139 estaciones inhabilitadas por "acción criminal", según el reporte del Ministerio de Defensa. **[Reparar los daños causados puede tomar 6 meses o más, con un costo que tendrán que pagar todos los ciudadanos de más de US\$5 millones y medio de dólares, dice el reporte].***²⁵ (negritas fuera del texto)

²⁵ Daños y pérdidas económicas por el paro nacional en Colombia, (junio 11), CNN Latinoamérica, 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto de acuerdo pretende desincentivar las acciones violentas que se realicen con ocasión al ejercicio del derecho de manifestación constitucionalmente protegido, así como también busca evitar la ocurrencia de daños en el patrimonio privado y público de los ciudadanos, propender por el cuidado de la vida de aquellos participantes que pretenden ejecutar de forma legítima su manifestación pacífica y de aquellos que no están involucrados. Por último, garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos, que por fuera de estos acontecimientos continúan con sus trabajos, sus obligaciones y demás actividades que permean la esfera de la tranquilidad.

Este proyecto de acuerdo no pretende reducir la validez que tiene el derecho de manifestarse pacíficamente, y realza a aquellos que a través de estos mecanismos pretenden hacer sus pronunciamientos hacia la Administración Pública de forma pacífica, tal como está implícito en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia:

“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.”²⁶

Sin embargo, los derechos no tienen la connotación de absolutos en el marco del Estado Social de Derecho. La Procuraduría General de la Nación se ha referido frente a la posición que ha de tener una manifestación pacífica:

“Finalmente, recordó que los derechos de reunión, manifestación y protesta deben ser ejercidos de forma pacífica, por lo que la necesidad de la asistencia militar surge cuando durante el ejercicio de esos derechos se presentan hechos de violencia de nivel tal que atenten contra el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Además, la normatividad referente a la figura que se cuestiona [no tiene como objetivo la regulación integral, estructural y completa de un derecho fundamental, ni se refiere a la afectación o el desarrollo de los elementos estructurales de alguna prerrogativa concreta.]”

Tal y como se ha establecido, los límites de la manifestación pacífica son necesarios para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la sociedad. En el contexto del año 2021, se llevaron a cabo un total de 14.175 actividades de manifestación en todo el país, incluyendo 7,415 concentraciones, 2.475 marchas, 3.567 bloqueos y 678 movilizaciones. Estas cifras reflejan la diversidad de formas en que los ciudadanos ejercen su derecho a la protesta y expresan sus preocupaciones y demandas en diferentes contextos y situaciones. Sin embargo, también subrayan la necesidad de establecer límites claros y efectivos para garantizar que estas manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y segura, evitando la escalada hacia la violencia y protegiendo los derechos y la integridad de todos los involucrados.

²⁶ Constitución Política de Colombia, (1991), artículo 15.

Durante lo corrido de la jornada de manifestación pública, se han registrado **14.175*** actividades en **860** municipios de 32 departamentos y Bogotá.

7.415
Concentraciones

2.475
Marchas

3.567
Bloqueos

678
Movilizaciones

40
Asambleas

* FUENTE: POLICÍA NACIONAL. CORTE 27 DE JUNIO.



CLASES DE MODALIDAD DE PROTESTA - ACTIVIDADES

Concentración: Aglomeración de más de 5 personas. **Marcha:** Desplazamiento de personas a pie. **Bloqueo:** Afectación a ejes viales. **Movilización:** Desplazamiento de personas en vehículos. **Asamblea:** Menos de 5 personas aglomeradas en un lugar.

Ministerio de Defensa Nacional (2021)

En ese contexto, es necesario advertir que la intervención de la Fuerza Pública es imperativa cuando existen medios ilícitos o conductas punibles, que rompan el nexo causal con el derecho fundamental a la libre expresión; hay que entender entonces que la intervención de la Fuerza Pública, es un elemento que busca armonizar los intereses en juego, tal como lo señala la Corte Constitucional sobre las tensiones que se pueden producir y cómo se deben intervenir. A pesar de ello, en el lapso referenciado, se constataron afectaciones a la vida y libertad sobre miembros de la fuerza Pública ocurridos en el marco de las protestas:

AFECTACIONES A LA POLICÍA NACIONAL

Uniformados Fallecidos

1. Hombre, en Soacha, con arma cortopunzante.
2. Hombre, en Cali, con arma de fuego.

Uniformados Lesionados

- 1477 uniformados lesionados
 - ❖ 1414 hombres.
 - ❖ 63 mujeres.
 - ❖ 3 continúan hospitalizados.

Uniformados secuestrados

- 13 uniformados secuestrados (CPC art. 168. Secuestro simple) y retenidos en el Valle del Cauca.

Fuente:Elaboración propia a partir de la Policía Nacional, corte 27 de junio.

Los hechos de violencia registrados durante las manifestaciones del 2021 evidencian la necesidad latente de establecer determinados desincentivos a los actos violentos y delictivos que ocurren en el marco de las manifestaciones, que lejos de ser pacíficas, han dejado no sólo afectaciones a la población y a bienes públicos y privados, sino también a los miembros de la fuerza pública.

ALCANCES DE LA INICIATIVA

NECESIDAD DE GARANTIZAR EL RESPETO A LOS LÍMITES DEL DERECHO A LA PROTESTA

Las manifestaciones pacíficas como hecho natural de la sociedad, amparadas constitucionalmente como forma libre de expresión de la personalidad, incluida en la Constitución Política como derecho fundamental, debe ser garantizada para ejercer su libre ejercicio. A pesar de esto, este derecho no puede entenderse como absoluto, sobre todo cuando la legitimidad es sobrepasada por las acciones violentas que perjudican la esfera de los bienes jurídicos sobre los demás ciudadanos. Para tal fin, este Proyecto de Acuerdo tiene como alcance la reducción de hechos violentos, daños al patrimonio, reducción de hechos lamentables como muertes o heridos, y en general, cualquier detrimento que afecte a los ciudadanos del Distrito Capital.

El mecanismo por el cual se desarrolla el objetivo de este Proyecto de Acuerdo, es la suspensión de los beneficios educativos que ofrece el Distrito Capital, únicamente para aquellos que afecte la integridad física o patrimonial con hechos violentos a los ciudadanos de Bogotá D.C. Esta suspensión, por lo tanto, no debe ser vista como una consecuencia que elimine los derechos adquiridos de los beneficiados, si no como un mecanismo que desincentive a los manifestantes para que realicen actos contrarios a la Constitución Política, el Código Penal y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

El proyecto de acuerdo se centra en la necesidad de establecer una metodología con criterios diferenciados para la selección de candidatos o para la suspensión de becas asignadas a programas que conceden beneficios económicos a individuos involucrados en procesos penales o policivos. Esta medida se aplicaría específicamente a aquellos casos que están estrechamente relacionados con la afectación de bienes públicos, ya sean materiales o inmateriales, con el propósito de fomentar la excelencia y la integridad en el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, siempre respetando los derechos de los demás ciudadanos.

Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es necesario considerar la diferenciación entre dos grupos sociales que cumplen con todos los requisitos legales y reglamentarios para ser beneficiarios de estas becas, y que de manera paralela, se busca impedir la participación en las convocatorias o suspender el otorgamiento de las becas a aquellos individuos con antecedentes penales o policivos. Por lo tanto, el proyecto de acuerdo trata de una suspensión que limita la oportunidad de aspirar a la beca, pero no el derecho a recibirla una vez cumplidos los requisitos establecidos

(...) otros bienes constitucionales autorizaban para que ese grupo de personas cuya falta de suficiencia profesional ha sido demostrada en sede disciplinaria o penal tuvieran un trato distinto. No se entiende por qué un integrante de ese grupo tiene igual derecho a aspirar a acceder a unos recursos del Estado que el que tiene el grupo de profesionales cuya condición profesional no ha sido puesta en tela de juicio, cuando se trate de acceder a estudios que tengan que ver específica y puntualmente con el tipo de calidad profesional que requiere la clase de posgrado a cuya financiación se aspira. (Corte Constitucional, C-552 de 2016)

Es crucial reconocer que el acceso a recursos públicos para la educación superior no es un derecho absoluto, sino un privilegio que debe ser otorgado con responsabilidad y criterio. De esta manera, al establecer criterios diferenciados basados en la evaluación de la competencia profesional, se garantiza no solo la igualdad de oportunidades, sino también la excelencia académica y la integridad ética en la práctica profesional. En última instancia, esta medida contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones educativas y en el sistema de justicia, promoviendo una sociedad más justa y equitativa para todos sus miembros.

(...) en principio presentar antecedentes penales y/o disciplinarios no es razón suficiente para vedar el acceso a becas de estudios superiores, más ello, supone en casos concretos excepciones prohijadas por la Constitución. Mal puede avalarse con recursos estatales y a modo de premio la cualificación de un profesional que ha demostrado que el ejercicio de su experticia se realiza por fuera de la ley, en detrimento de otros y a despecho de valores superiores. (C-552-2016)

El acceso a los recursos del Estado para la formación académica debe considerar no sólo la igualdad formal, sino también la equidad sustantiva. Es decir, aquellos individuos cuya suficiencia profesional ha sido cuestionada en sede disciplinaria o penal, deberían ser evaluados de manera diferenciada al momento de acceder a fondos públicos destinados a programas educativos o sociales que guarden una relación directa con la afectación y su idoneidad. Esta medida no solo garantiza la idoneidad de los beneficiarios, sino que también promueve la excelencia y la integridad en el ejercicio de las profesiones.

El carácter de derecho–deber entre ,estudiante e institución, implica que genera obligaciones entre las partes del proceso educativo. Así, el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y ampliar su cobertura progresivamente, las instituciones educativas deben respetar los derechos de los estudiantes y asegurar la continuidad del servicio, y los estudiantes deben respetar sus reglamentos. De allí se deriva que la obligación de garantizar la prestación del servicio educativo no sea absoluta, sino que dependerá, entre otras cosas, del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los estudiantes.

Las conductas de los estudiantes deben reflejar los principios que promueven el crecimiento educativo a través de una beca, la cual se otorga en consonancia con los principios del Estado Social de Derecho. En la práctica, el distrito encargado del proceso formativo de los estudiantes debe establecer las reglas que mejor concreten estos derechos sin coaccionar la conducta del estudiante. En otras palabras, un estudiante siempre tiene la oportunidad de expresarse, respetando las normas legales, ya que el objetivo principal del Estado es formar al estudiante de manera correcta para que en el futuro pueda contribuir positivamente a la sociedad.

En consecuencia, si bien es cierto que las instituciones educativas pueden imponer sanciones por determinadas conductas que incumplen con el reglamento institucional, cuando una sanción afecta la continuidad de la formación académica, es fundamental respetar rigurosamente las garantías del debido proceso. Esto se debe a que el derecho a la educación incluye la potestad de reclamar acceso al sistema educativo y permanecer en él. En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de continuidad asegura la prestación efectiva y la permanencia del servicio público de educación: *“el núcleo esencial del derecho a la educación está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo [...] así como de permanecer en el mismo”*²⁷, por lo que cualquier interrupción debe estar debidamente justificada para no vulnerar el derecho fundamental a la educación.

Las entidades distritales, al proceder con la declaración de suspensión, no vulneran el derecho a la educación, dado que la suspensión no implica negar la posibilidad de permanecer en la institución educativa ni se trata de una decisión arbitraria por parte de las entidades. Más bien, es una consecuencia del incumplimiento de los deberes correlativos hacia la institución, la comunidad educativa y la sociedad, derivado de conductas que puedan afectar los bienes jurídicos protegidos por la ley y la Constitución, cumpliendo con las garantías procesales que determine la entidad.

²⁷ Corte Constitucional T-453-22: Si bien es cierto que las instituciones educativas pueden imponer sanciones ante el incumplimiento del reglamento por parte de sus estudiantes, cuando la sanción en cuestión afecta la continuidad de la formación académica, debe haber un respeto riguroso a las garantías al debido proceso. Lo anterior, puesto que “el núcleo esencial del derecho a la educación está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo [...] así como de permanecer en el mismo(...)”

Las conductas delictivas realizadas durante manifestaciones sociales constituyen una transgresión de los deberes sociales, lo que justifica la aplicación de una sanción. Sin embargo, esta sanción no compromete el principio de permanencia y acceso a la educación. El objetivo principal de la sanción no es suspender las actividades estudiantiles o formativas, sino suspender el beneficio económico mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Por último, las entidades distritales, tienen ciertas facultades para concretar el acto educativo a través de beneficios, becas y cupos, que las distinguen entre sí y que responden a la pluralidad de visiones que circulan en la sociedad. Estas facultades están asociadas, en general, a la regulación de la relación entre los miembros de la comunidad académica y a la proyección institucional, mediante la fijación de valores y principios por desarrollar. Cada entidad puede disponer su propio sendero educativo en el marco de la Constitución y la ley. Ello asegura la diversificación de la oferta educativa, que no es otra cosa que la afirmación de la libertad de pensamiento y la libertad de asociación en algunos casos. Bajo esa misma facultad, con el objetivo de cumplir con los propósitos educativos que dieron lugar a los programas de beneficios, becas y cupos en consonancia con la ley, podrán ser suspendidos en determinadas situaciones siempre y cuando se adelante un procedimiento específico: “(…)la permanencia en el sistema educativo no es un derecho absoluto. Lo anterior significa que, por tratarse de un derecho-deber, está de cierto modo determinado por los derechos y las obligaciones que tiene el estudiante y por los exámenes de calidad de la educación o similares. El incumplimiento de los deberes por parte del estudiante habilita a las autoridades para tomar las decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso.”(Corte Constitucional, T-177-22)

ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL

El artículo 7 de la Ley 819 de 2003, establece lo siguiente:

*“Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.”*²⁸

²⁸ Ley de Presupuesto, Responsabilidad y Transparencia Fiscal, No. 819 de 2003 (Julio 9).

Esta propuesta no tiene un impacto financiero o fiscal que requiera cambios en el marco fiscal a mediano plazo, ya que no aumentará el presupuesto del Distrito ni dará lugar a la creación de una nueva fuente de financiamiento. Las disposiciones de este proyecto serán cubiertas por el presupuesto de las entidades pertinentes.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con el fin de promover la participación ciudadana, en distintas manifestaciones pacíficas de la ciudadanía, los participantes radicados en el Distrito Capital han manifestado la necesidad de imponer límites a aquellos que participan en las protestas, donde existan mecanismos de control para las acciones violentas propiciadas por algunos individuos.



Por otro lado, en mesas técnicas para escuchar a la ciudadanía se ha identificado que muchos ciudadanos con establecimientos de comercio, se han visto perjudicados por las acciones desafortunadas de los manifestantes, ocurridas en 2019, 2020 y 2021; en este sentido, han solicitado una intervención de la administración pública para establecer límites en las manifestaciones públicas, donde se vea una acción efectiva que permita disminuir los riesgos sobre los bienes públicos y privados, así mismo, que pueda haber una reducción en los heridos de las manifestaciones debido a la violencia que se desarrolla por motivos de intolerancia.

En conclusión, se hace imperativa la realización de un Proyecto de Acuerdo que establezca las garantías sobre el respeto del derecho a la manifestación pacífica, a través de un mecanismo que pueda reducir el interés o el número de acciones violentas durante cualquier tipo de manifestación o protesta.

RELACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Este Proyecto de Acuerdo pretende cumplir y tener conexidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente, con el objetivo No. 16: “Paz, Justicia e Instituciones sólidas” en el que se busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, donde los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia suponen una amenaza; siendo así, es elemental que se construyan mecanismos que disminuyan o desincentivan las acciones violentas y se beneficien las comunidades que pretenden movilizarse o protestar por cualquiera de sus iniciativas, del mismo modo, que los ciudadanos del Distrito Capital que no guarden nexos con alguna manifestación no vean afectados sus bienes jurídicos como la vida. Al priorizar este Proyecto de Acuerdo, no solo se pretenden suspender los beneficios educativos a los infractores de la Constitución Política y las normas, también realiza una construcción institucional para fomentar el fortalecimiento de las instituciones, y la guarda de la vida, como hecho generador de los demás derechos a los que son acreedores todos los ciudadanos. Desincentivar las acciones o manifestaciones violentas respalda la Paz y la justicia sobre los ambientes pacíficos de participación ciudadana de todos los ciudadanos del Distrito Capital.

RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

El presente Proyecto de Acuerdo se fundamenta con base en los propósitos establecidos del Plan Distrital de Desarrollo (*Acuerdo 761 de 2020*), en especial, lo redactado en el propósito tercero: “inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación”. Este Proyecto de Acuerdo cumple con los objetivos del PDD al establecer mecanismos garantistas que propenden por establecer límites basados en la paz y justicia, teniendo en cuenta la protección constitucional del derecho a la manifestación pacífica como herramienta idónea para el desarrollo de la libre expresión. Así mismo, beneficiando la cultura educativa para que sea foco del conocimiento y rechace la violencia de cualquier tipo, siguiendo los principios del proceso penal que garanticen el acceso a la justicia, estableciendo precedentes para el mantenimiento del orden y la paz en ocasión de las manifestaciones públicas. Ahora bien, con la ejecución de este Proyecto se atiende a la meta estratégica No. 72 del propósito número 3, que arguye: “*Sensibilizar anualmente a mínimo 200 personas que tengan impuestas múltiples medidas correctivas por reiterados comportamientos contrarios a la convivencia y que no hayan pasado por la pena privativa de la libertad.*”²⁹

²⁹ Acuerdo de Adopción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, No. 761 de 2020 (junio 11).

RELACIÓN CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El presente Proyecto de Acuerdo tiene plena conexidad con el POT (*Decreto No. 555 de 2021*) con respecto a la pretensión de organización sobre las manifestaciones pacíficas desarrolladas en el espacio público peatonal para el encuentro, al promover una intervención sobre los hechos violentos que repercutan sobre los bienes público y privados, sobre lesiones de los participantes de las protestas, y demás acciones vandálicas que acontezcan en el albor de las manifestaciones; siempre con el firme objetivo de promover un ambiente pacífico, donde se exalten a las comunidades que busquen reivindicar sus derechos a través de mecanismos legítimos protegidos jurídicamente.

Estos aspectos se encuentran definidos en los Componentes del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal Para el Encuentro – Art. 90; al respecto, es importante destacar que este Proyecto pretende garantizar el respeto de los espacios públicos para el correcto funcionamiento de acuerdo a los planteamientos del POT, evitando así un detrimento en el patrimonio del Distrito Capital y aumentando la capacidad de goce de todos los ciudadanos. Adicionalmente, pretende gestar la sostenibilidad y gestión orientada a salvaguardar los valores, calidades y las formas de uso del espacio público para su aprovechamiento, goce y disfrute.

COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El artículo 313 de la Constitución Política establece las funciones de los Concejos: *"I. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio"*.³⁰

El Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto Ley 1421 de 1993, establece: *"Artículo 13: Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario"*³¹

Ley 137 de 1994, Artículo 32. Atribuciones. Modificado por el art. 18, Ley 1551 de 2012. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: *"8. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. PARÁGRAFO 1.- Los concejos municipales mediante acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la forma y los medios como los municipios puedan otorgar los beneficios establecidos en el inciso final del Artículo 13, 46 y 368 de la Constitución Nacional."*³²

³⁰ Constitución Política de Colombia (1991), artículo 313.

³¹ Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Decreto 1421 de 1993 (Julio 21)."

³² Ley de Estados de Excepción, No. 137 de 1994 (junio 2).

PROYECTO DE ACUERDO N° 879 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDEN LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS Y SOCIALES OTORGADOS POR EL DISTRITO CAPITAL A AQUELLOS CIUDADANOS BENEFICIARIOS QUE ESTÉN SIENDO INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS O CONTRAVENCIONES EN EL MARCO DE UNA MANIFESTACIÓN PÚBLICA”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 1 y 7 del artículo 12, del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto la suspensión provisional de beneficios educativos, económicos y/o sociales otorgados por el Distrito Capital a aquellos ciudadanos beneficiarios que estén siendo formalmente investigados por la comisión de delitos o contravenciones en el marco de una manifestación pública.

Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente acuerdo, se establecen las siguientes definiciones:

- a. Manifestación pública:** Ejercicio del derecho ciudadano a reunirse pacíficamente para expresar opiniones, demandas o preocupaciones, de forma individual como colectiva, y sin discriminación alguna, ante las autoridades y la opinión pública, como parte integral de la libertad de expresión, en un marco jurídico democrático que promueve la participación ciudadana y el reconocimiento de derechos constitucionales.
- b. Programas educativos:** Programas de formación educativa que ofrece el Distrito Capital, por medio de la asignación de cupos-becas para cursar carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en instituciones de educación superior de alta calidad en Bogotá.
- c. Programas sociales:** Programas que reciben transferencias monetarias en el marco de la estrategia IMG (Ingreso Mínimo Garantizado).
- d. Contravenciones:** Conductas contrarias a la convivencia descritas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Ley 1801 de 2016.
- e. Delitos:** Conductas típicas, antijurídicas y culpables, establecidas en el Código Penal Colombiano.

Artículo 3. Imposición de suspensión provisional en el marco de manifestaciones públicas. Las entidades distritales encargadas de la gestión de programas de formación educativos y sociales, tendrán la facultad de declarar la suspensión provisional de los beneficios a aquellos beneficiarios que estén siendo investigados en un proceso penal o policivo, como resultado de su presunta participación en delitos o contravenciones cometidos durante una manifestación pública.

Parágrafo único: Las entidades distritales deberán implementar un procedimiento específico que otorgue las garantías del debido proceso en la imposición de la suspensión provisional.

Artículo 4. Duración de la suspensión: El término de la suspensión provisional de beneficios educativos y sociales estará directamente vinculado a la duración del proceso penal o policivo que involucre al beneficiario.

Parágrafo Primero. Una vez esclarecida la situación jurídica del implicado y culminado el proceso respectivo, se procederá a la revisión de la suspensión provisional permitiendo al beneficiario retomar sus beneficios en caso de resultar absuelto o exonerado de las acusaciones formuladas.

Parágrafo Segundo: En caso contrario, si el beneficiario es hallado responsable penal y contravencionalmente, los beneficios podrán ser retirados definitivamente.

Artículo 5. Reglamentación e implementación. La Administración reglamentará e iniciará la implementación de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 6. Informe. La Secretaría de Educación en colaboración con la Secretaría de Integración Social remitirá al Concejo de Bogotá un informe anual el 21 de noviembre sobre la implementación del presente acuerdo.

Artículo 7. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación.

Publíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D.C., a los ____ días del mes de ____ del año 2025

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO N° 880 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS CAMBIOS DE NOMENCLATURA VIAL EN EL DISTRITO CAPITAL.”

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer un procedimiento claro y participativo para la asignación y modificación de nombres a las calles y vías de Bogotá, que garantice la inclusión de la comunidad en el proceso de toma de decisiones y promueva la preservación de la memoria histórica y cultural de la ciudad.

II. SUSTENTO JURÍDICO

A continuación, se presentan los instrumentos normativos y jurisprudenciales que sustentan la expedición del presente proyecto de acuerdo distrital.

• DE ORDEN CONSTITUCIONAL

La Constitución Política de Colombia de 1991 otorgó a todos los ciudadanos la oportunidad de involucrarse y participar activamente en la supervisión de la gestión pública. Además, estableció cómo los ciudadanos tomamos parte en la planificación, seguimiento y control de los resultados de las acciones del Estado y por ende del Distrito de Bogotá D.C.

Preámbulo de la Constitución

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus Delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia”

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

(...) 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. (...)

Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.

- **BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD**

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo 15

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural

Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial .

Artículo 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: (...)

c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; (...)

d) Otros derechos civiles, en particular:

vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales.

- **DE ORDEN LEGAL**

LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática

LEY 134 DE 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.

LEY 136 DE 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Las disposiciones de la Ley 136 de 1994 son aplicables en Bogotá por ausencia de norma expresa referentes al Distrito Capital, conforme a lo previsto en la remisión normativa que consagra el artículo 2º del Decreto Ley 1421 de 1993 :

Artículo 2. Régimen aplicable. El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.

Artículo 32. (Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012).

Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.

[...]

5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.

[...]

Parágrafo 2º. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderán asignadas a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríen la Constitución y la Ley.

LEY 489 DE 1998: Por la cuál se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Artículo 32.- Democratización de la Administración Pública. Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

- **DE ORDEN DISTRITAL**

Acuerdo Distrital 257 de 2006: Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones

Artículo 3º. Principios de la función administrativa distrital. La función administrativa distrital se desarrollará en consonancia con el interés general de la ciudadanía y los fines del Estado Social de Derecho y se llevará a cabo atendiendo los principios constitucionales y legales de democratización y control social de la Administración Pública Distrital, moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, efectividad, economía, celeridad y buena fe, así como a los principios de distribución de competencias, coordinación, concurrencia, subsidiaridad y complementariedad.

Las autoridades distritales desarrollarán sus actuaciones observando los principios enunciados en el presente artículo con el fin de garantizar la efectividad y materialización de los derechos humanos sean ellos individuales o colectivos, propiciar la participación social en las decisiones públicas y lograr la integración dinámica entre la Administración Distrital y los habitantes del Distrito Capital.

Decreto Distrital 606 DE 2023: Por medio del cual se actualiza el Sistema Distrital de Participación Ciudadana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones

Artículo 3º. OBJETIVO DEL SISTEMA. *El Sistema Distrital de Participación Ciudadana tiene por objetivo garantizar una efectiva coordinación y sinergia entre las y los actores y espacios sociales e institucionales de la participación, así como la pertinencia de los instrumentos y condiciones que eliminen obstáculos y faciliten el ejercicio del derecho a la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad.*

Artículo 42º. SUBSISTEMA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. *Los Subsistemas Locales de Participación Ciudadana se entienden como parte del Sistema Distrital de Participación Ciudadana, comprenden el conjunto de entidades públicas, instancias de participación y organizaciones sociales de carácter local que se articulan con el fin de territorializar y dar trámite a las diferentes demandas y ofertas de los componentes en el ámbito local y concertar propuestas de política pública de participación local con el fin de procurar decisiones que garanticen el derecho a la participación en la localidad.*

Decreto Distrital 477 DE 2023: Por medio del cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034 y se dictan otras disposiciones.

Artículo 2º.- Concepto. *La Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, es el marco de acción de la Administración Distrital en materia de promoción y garantía del derecho a la participación, para avanzar en el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de una sociedad más justa, basada en la construcción colectiva de lo público.*

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación. *La Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, se dirige a todas las personas habitantes del territorio urbano y rural de Bogotá Distrito Capital, en todos los espacios en los que se desarrollen procesos de participación ciudadana.*

Artículo 8º.- Objetivo general. *La Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, tiene como objetivo general hacer eficaz el ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía en Bogotá D.C., a través del mejoramiento de la gobernanza, de la estructura institucional y las competencias ciudadanas para la incidencia en los asuntos públicos durante el periodo comprendido entre el año 2023 y el 2034.*

Artículo 9°.- *Objetivos específicos. La Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital 2023 - 2034, tiene los siguientes objetivos específicos:*

- 1. Generar condiciones para una gobernanza democrática que aumente el alcance de la participación ciudadana en toda su diversidad en las decisiones públicas del gobierno distrital.*
- 2. Fortalecer el funcionamiento, articulación y capacidades institucionales para la garantía del ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía desde el reconocimiento de la diversidad en el ciclo de la gestión pública.*
- 3. Fortalecer las competencias ciudadanas y su accesibilidad para el robustecimiento del tejido social en Bogotá D.C.*

Artículo 11°.- *Estrategias Generales de la Política Pública de Participación Incidente. Las Entidades Distritales en todos los niveles y sectores contribuirán en la ejecución de las siguientes estrategias generales, con el propósito de implementar los ejes señalados en el artículo 10° del presente acto, así como las líneas de acción contenidas en el documento soporte y en el Plan de Acción de la Política que hacen parte integral del presente Decreto:*

f. Estrategia de Colaboración Ciudadana e Innovación para la Gestión Pública. *Esta estrategia tiene como objetivo facilitar la inclusión de las personas en los procesos de gestión pública a través de medios tecnológicos, herramientas de cocreación o instrumentos de innovación que profundicen la democracia participativa en Bogotá D.C., en concordancia con los pilares del Modelo de Gobierno Abierto. Estas acciones y procesos son:*

- Causas Ciudadanas. *Son ejercicios de movilización y organización cívica y comunitaria en torno a causas comunes, que facilita la inclusión de temas agenciados por las personas y visibilizados como problemáticas sociales, económicas, culturales y ambientales, que requieren pronunciamiento o actuación por parte del Gobierno Distrital en la agenda pública, con el fin de mitigar la conflictividad social.*

- Consultas Ciudadanas. *Son ejercicios de consulta a la ciudadanía sobre la formulación de planes, programas, proyectos de inversión, proyectos de actos administrativos o priorización de acciones en donde se evidencie un interés general por parte de las personas que habitan en Bogotá.*

Artículo 13°.- *Responsabilidades frente a la Política Pública de Participación Incidente. La dirección de la Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, estará a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, como entidad cabeza de sector, la cual coordinará, supervisará y hará el seguimiento de la implementación y ejecución de las políticas, planes y programas de la Política Pública, con el apoyo del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal como entidad adscrita al sector Gobierno, encargada de orientar y liderar el diseño técnico y gestión de las estrategias que materializan la Política Pública.*

- **JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL**

Sentencia C-065-21. El derecho a la participación no circunscrita al campo electoral

(...) independientemente de lo que acontece respecto de la democracia representativa, las posibilidades de participación no se agotan en el derecho al sufragio, sino que sus formas pueden realizarse por medio de otros métodos que permitan el acercamiento de la ciudadanía a las decisiones que en general afectan su vida. Estas formas pueden variar por diversos factores atendiendo, por ejemplo, a las circunstancias particulares del grupo social o de las materias involucradas en cada asunto. En todo caso, sin importar el mecanismo de participación que sea determinado por la ley, ésta deberá garantizar que quienes se encuentren involucrados estén informados de las actuaciones de las administraciones públicas o de las autoridades en general, y/o contar con herramientas o espacios para manifestar o expresar sus puntos de vista. Ello necesariamente se integra con el carácter pluralista e inclusivo del Estado colombiano, según el cual resulta imperativo involucrar a todos los grupos, inclusive los minoritarios, en los asuntos que los afectan.”

Sentencia C-150-15. Participación de los ciudadanos-Deberes del Estado.

La Corte entiende que la participación como derecho de los ciudadanos y eje medular del ordenamiento constitucional vigente implica (i) el deber del Estado de abstenerse de adoptar medidas de cualquier tipo que impidan el libre ejercicio de la participación por parte de ciudadanos y organizaciones sociales, (ii) el deber de adoptar medidas de todo tipo que eviten que las autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten el libre ejercicio de las facultades en cuyo ejercicio se manifiesta la participación y (iii) el deber de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que, al mismo tiempo, eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección alcanzados. Estos deberes del Estado se concretan en deberes específicos a los que a continuación la Corte se refiere: (i) El deber de abstenerse de estatizar la democracia y, en consecuencia, la obligación de proteger el pluralismo, (ii) Deber de promover formas de participación democrática que comprendan no sólo la intervención de partidos o movimientos políticos sino también de organizaciones sociales de diferente naturaleza. (iii) Deber de promover estructuras democráticas en las diferentes formas de organización social. (iv) Prohibición, que vincula a todos los órganos públicos, funcionarios y particulares, de eliminar alguna de las dimensiones de la democracia. (v) Mandato de no sustituir a las autoridades estatales competentes en el desarrollo de actividades de control.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El Concejo de Bogotá, en ejercicio de sus funciones, ha sido responsable de determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios en la ciudad, con el fin de facilitar la identificación y acceso a los diferentes espacios. Sin embargo, los cambios en la nomenclatura pueden tener un impacto significativo en la vida cotidiana de los ciudadanos, por lo que se considera implementar un procedimiento participativo que permita a la comunidad involucrarse de manera activa en estos procesos.

La iniciativa o propuesta de nombrar una calle en la ciudad de Bogotá D.C., no debería ser un acto unilateral; sino por el contrario, debe responder a un proceso participativo que involucre a los habitantes del sector y a la ciudadanía en general. Para lograrlo, es necesario crear e incentivar espacios propicios de diálogo y debate, tales como audiencias públicas, encuentros ciudadanos e incluso, consultas al interior de las comunidades en donde puedan expresar sus opiniones sobre la propuesta.

En ese orden de ideas, el presente proyecto de acuerdo busca garantizar que cualquier modificación en la nomenclatura sea discutida de manera abierta y participativa, considerando el contexto histórico, cultural y geográfico, así como los intereses de los residentes.

El ordenamiento jurídico colombiano, encabezado por la Constitución Política y las normas estatutarias que la desarrollan, enfatiza el carácter participativo de la ciudadanía en la toma de decisiones que los afectan en diversos ámbitos: políticos, económicos, culturales y sociales. La carta magna trae consigo valores y principios que materializan y expresan la noción de Estado Social de Derecho.

Tal circunstancia, fue reafirmada por la Corte Constitucional en Sentencia T-406-1992 al precisar que: *“La Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales.*

Adicionalmente, La Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 6, reconoce la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo en los siguientes términos:

“La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.”

En ese sentido, propiciar espacios de participación en los que la ciudadanía pueda expresarse libremente sobre la decisión de modificar, asignar, o eliminar el nombre de la calle o carrera cercana al lugar donde reside, satisface los estándares internacionales y constitucionales de garantía de los derechos de participación, en tanto permite tomar un lugar en la discusión sobre los aspectos sociales y culturales que los afectan o benefician.

Nombrar una calle con el nombre de una persona suele tener un profundo significado para los habitantes de una comunidad. A través de este gesto, se rinde homenaje a figuras que han realizado contribuciones significativas en áreas como la política, la cultura, los derechos humanos o la ciencia, entre otras. Además de preservar la memoria histórica de eventos y luchas importantes, este reconocimiento fortalece la identidad cultural de la comunidad, puede inspirar a las futuras generaciones y fomentar el diálogo entre estos sobre valores y logros colectivos.

En síntesis, adoptar un nombre significativo para una vía de la ciudad puede generar un sentido de pertenencia y orgullo entre los habitantes, y propiciar escenarios educativos sobre la historia distrital o local. Sin embargo, también puede dar lugar a controversias, especialmente si la comunidad no se encuentra de acuerdo con la imposición de un nuevo nombre para la calle o vía que colinda con su lugar de residencia. Tal situación, generaría malestar y descontento en los ciudadanos lo que abre el debate sobre los valores que la comunidad desea promover. los cuales deben ser abordados a través de procesos participativos en el cual las partes interesadas puedan ser escuchadas y brindar sus opiniones sobre la modificación y asignación de la nomenclatura.

Estos procesos participativos, han sido aplicados en distintas partes del mundo. Un estudio comparado evidencia que, verbigracia, el Reglamento de Nomenclaturas del Municipio de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco; México³³, establece como condición necesaria para el proceso de nominación o renombre de las calles: la participación de la ciudadanía en los siguientes términos:

“Artículo 17. De la participación de vecinos.

1. Los vecinos que siendo mayores de edad, por la ubicación de su domicilio en una vialidad o en una colonia, podrán participar en el proceso de la asignación o modificación de la nomenclatura de vialidades o espacios públicos, según se señale en el presente ordenamiento. (...)

3. Todos los interesados en participar deben acreditar su legítimo derecho a opinar con base en la documentación que presenten para manifestar que su domicilio se encuentra dentro de la vialidad o colonia donde se requiere la participación ciudadana.

4. Durante las consultas, los vecinos involucrados tienen derecho a hacer las manifestaciones de manera verbal o por escrito que estimen oportunas ante las autoridades que realizan la consulta y estas deberán dar cuenta de las mismas en sus informes para el dictamen técnico.

5. El resultado de la consulta debe expresarse mediante un informe con la precisión que permita conocer si hay un porcentaje de mayoría o un empate que acepte o rechace la propuesta planteada.”

Otro ejemplo de ello es la ciudad de Barcelona, España, que aunque su trámite es sustancialmente distinto y está a cargo del gobierno local, prevé un espacio de participación ciudadana.

- 1. El propio Ayuntamiento o cualquier persona, entidad tanto pública como privada o asociación puede proponer un cambio de denominación de una calle.*
- 2. La Ponencia del Nomenclátor, comisión interdisciplinar municipal, recibe las propuestas, las estudia y las consulta con los distritos municipales.*
- 3. Cuando la ponencia llega a un acuerdo, eleva la propuesta a la alcaldesa, encargada de firmar la aprobación definitiva del cambio de denominación.³⁴*

En este sentido, la participación ciudadana debe constituirse como un ejercicio fundamental para asegurar que el nombre elegido representa genuinamente el sentir e interés de quienes habitan el barrio o sector. Es deber del Distrito Capital proteger la igualdad de género, sin que ello suponga la omisión de un proceso participativo y democrático en el que la comunidad que reside o desempeña sus actividades económicas en la calle objeto de renombre, manifieste expresamente su voluntad. La promoción del respeto y la tolerancia, objeto intrínseco a este tipo de iniciativas, no puede contravenir el sentir expreso de la comunidad.

³³ [Reglamento de Nomenclatura del Municipio de Guadalajara Capítulo I Disposiciones Generales](#)

³⁴ [Cambio de nombre de calles | Ayuntamiento de Barcelona](#)

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Así mismo para el objeto del presente proyecto de acuerdo las disposiciones de la Ley 136 de 1994 son aplicables en Bogotá por ausencia de norma expresa referentes al Distrito Capital, conforme a lo previsto en la remisión normativa que consagra el artículo 2º del Decreto Ley 1421 de 1993 :

ARTÍCULO.- 2o. Régimen aplicable. *El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.*

En este sentido, el Artículo 32. Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012):

Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.

[...]

5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.

[...]

Parágrafo 2º. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderán asignadas a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríen la Constitución y la Ley

Por tanto, en aras de otorgar un procedimiento participativo para la competencia sobre el proceso de cambio de nombre de las calles que le corresponde al Concejo de Bogotá D.C.

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Para el presente proyecto de acuerdo, la participación ciudadana es responsabilidad del ejercicio de iniciativa normativa del concejal o concejala presenten un proyecto de acuerdo para cambiar la nomenclatura de una calle. Por tanto no genera ningún impacto fiscal.

V. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Sobre la creación de ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles establece una clara conexión con el proyecto de acuerdo propuesto, ya que, se busca empoderar a los ciudadanos en la gestión de su entorno urbano, permitiendo que participen activamente en decisiones clave sobre su espacio.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. [...] Participe activamente en la administración y gestión de su ciudad. Defienda el tipo de ciudad que cree que necesita. Defina el concepto general de su edificio, calle y barrio, y actúe en consecuencia para conseguirlo. ¿Hay suficiente trabajo? ¿Pueden caminar sus hijos al colegio de forma segura? ¿Puede salir a pasear con su familia por la noche? ¿A qué distancia está la parada de transporte público más cercana? ¿Es buena la calidad del aire? ¿Cómo son los espacios públicos compartidos? Cuanto mejores sean las condiciones en que se desenvuelve la comunidad, mayor será el efecto sobre la calidad de vida.

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Al promover la participación de la comunidad en los cambios de nomenclatura de las vías públicas y predios, la ley fortalece la capacidad de los ciudadanos para definir el carácter de su calle, barrio y ciudad, alineándose con el principio de planificación y gestión participativa planteado en el Objetivo 11. Este enfoque, al igual que el objetivo global, aboga por una urbanización inclusiva y sostenible donde la ciudadanía no solo se involucra en la definición de su entorno inmediato, sino que también contribuye a mejorar las condiciones de vida generales a través de procesos participativos que reflejan sus necesidades y valores, potenciando así la calidad de vida en la ciudad.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO.

El Acuerdo 927 de 2024, Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, en su artículo 14, Programa 23 del objetivo estratégico **“Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”**, se alinea conceptualmente con el proyecto de acuerdo propuesto sobre la participación comunitaria en los cambios de nomenclatura.

En primera medida ambos promueven un enfoque participativo en la gestión del espacio público. Mientras el programa busca garantizar la apropiación social de los espacios mediante la seguridad, iluminación y arte urbano, la ley propuesta extiende ese principio de participación ciudadana hacia la nomenclatura de las vías públicas y predios. En segunda medida, ambas normativas buscan involucrar a la comunidad en las decisiones que afectan el ordenamiento territorial, fortaleciendo la gobernanza colaborativa y promoviendo un sentido de pertenencia en la gestión del entorno urbano.

Artículo 14. Programas del Objetivo Estratégico “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”. Adóptense los siguientes programas para la materialización del objetivo estratégico:

14.1. Programa 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo. *Con el objetivo de hacer de Bogotá un territorio adaptado, equilibrado y sostenible, fortalecer la planeación territorial como una labor continua con la capacidad de comprender las complejidades y retos de las dinámicas urbana, rural y regional, con el fin de reaccionar de manera oportuna a las demandas del desarrollo territorial, social, económico y ambiental y con ello garantizar la calidad de vida y el bienestar de las personas que habitan y visitan el territorio. [...]*

La participación ciudadana es el eje transversal que articula la gestión del espacio público y la planificación territorial, asegurando que las decisiones reflejen los intereses colectivos y culturales de la ciudad.

PROYECTO DE ACUERDO N° 880 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA
LOS CAMBIOS DE NOMENCLATURA VIAL EN EL DISTRITO CAPITAL.”****El Concejo de Bogotá, D.C.**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto establecer un procedimiento participativo para que las comunidades puedan intervenir en las decisiones relacionadas con los cambios de nomenclatura de las vías públicas, predios o domicilios donde habitan y/o tienen afinidad, con el fin de garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones por parte del Concejo de Bogotá.

Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente acuerdo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Nomenclatura Vial: es el conjunto de caracteres alfanuméricos que se emplean para identificar una vía; se compone de la nomenclatura de la vía principal y el nombre común para aquellas vías que el Concejo de Bogotá determine a través de acuerdo.

Nomenclatura Domiciliaria: es el identificador alfanumérico único asignado a un predio y se encuentra clasificada en las siguientes categorías: Principal (acceso principal al predio), Secundaria (accesos secundarios localizados en sobre la vía de acceso principal) e Incluye (corresponde a accesos localizados en vías diferentes a la nomenclatura principal). Y se compone de: Vía principal - Vía generadora. El número que representa la distancia aproximada en metros desde el eje generador o de referencia hasta el acceso al predio, ajustándola al número par o impar correspondiente. En caso de requerirse, tiene un tercer componente al interior del lote e identifica interior, mejora o unidades en propiedad horizontal.

Artículo 4. Consulta Ciudadana. La Secretaría Distrital de Gobierno diseñará y organizará un periodo de consulta ciudadana de al menos 30 días, durante el cual los habitantes del sector y/o quienes tengan afinidad, podrán expresar sus opiniones y posiciones respecto al cambio de nomenclatura vial propuesto a través de un proyecto de acuerdo. Al finalizar dicho periodo, la Secretaría deberá recopilar y analizar las opiniones recibidas y elaborar un informe que será presentado al Concejo de Bogotá antes del primer debate, como insumo para la deliberación en el cabildo distrital.

Parágrafo: La Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, será responsable de supervisar y garantizar la transparencia del proceso, asegurando el cumplimiento de los principios establecidos en la Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023-2034 o la que haga sus veces

Artículo 5. Prohibición. El Concejo de Bogotá se abstendrá de modificar la nomenclatura vial cuando dicha modificación altere el contexto histórico, cultural o geográfico de la zona objeto de discusión.

Artículo 6. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los ____ días del mes de ____ del año 2025

Atentamente,

H.C JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO N° 881 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA DESCONGESTIÓN DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA QUE ESTÁN BAJO LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto la adopción de medidas para la descongestión de los Centros de Detención Transitoria que están bajo la jurisdicción del Distrito Capital, con el fin de reducir el hacinamiento y asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos de dignidad humana para la población reclusa en dichos centros.

II. SUSTENTO JURÍDICO

• DE ORDEN CONSTITUCIONAL

Que el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia precisa que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas **ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**”.

Que el artículo 93° de la Constitución Política de Colombia, ordena que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.”

Que el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, establece que: “toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.”

Que el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* estipula que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (...) **Los procesados estarán separados de los condenados**, salvo en circunstancias excepcionales, y **serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas**”

• DE ORDEN LEGAL

LEY 65 DE 1993: “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario” dispone en su artículo 17 la responsabilidad del Distrito Capital en la “creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para **las personas detenidas preventivamente** y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.”

LEY 1709 DE 2014: “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.”

- **Artículo 12.** Modifícase el artículo 21 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 21. Cárceles y pabellones de detención preventiva. Las cárceles y pabellones de detención preventiva son establecimientos con un régimen de reclusión cerrado. Estos establecimientos están dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva en los términos **del artículo 17 de la Ley 65 de 1993**, los cuales están a cargo de las entidades territoriales. Podrán existir pabellones para detención preventiva en un establecimiento penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten razones de seguridad, **siempre y cuando estos se encuentren separados adecuadamente de las demás secciones de dicho complejo y de las personas condenadas**. (negrita y subrayado fuera de texto)

Las entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura **podrán realizar las gestiones pertinentes para la construcción** conjunta de ciudadelas judiciales con un centro de detención preventiva anexos a sus instalaciones, así como articular todo lo necesario para la construcción y el mantenimiento de estos complejos judiciales.

LEY 715 DE 2001: “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.”

- **Artículo 76.6.** En materia de centros de reclusión: Los municipios en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, podrán apoyar la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad.

LEY 2197 DE 2022: “Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones.”

- **Artículo 63.** Adiciónese un artículo 34 al título 11 de la Ley 65 de 1993, del siguiente tenor:
- **Artículo 34.** De la infraestructura carcelaria, su operación y mantenimiento. El Gobierno Nacional y las entidades territoriales del orden departamental, municipal y distrital para efectos del diseño, construcción, dotación, operación o mantenimiento de la infraestructura carcelaria o penitenciaria podrá efectuar su desarrollo a través de esquemas de Asociación Publico Privadas, APP, salvo en lo referente a los servicios de tratamiento penitenciario y la prestación de servicios de seguridad y vigilancia de población carcelaria.

LEY 906 DE 2004: “Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

- **Artículo 1.** Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.
- **Artículo 313.** Procedencia de la detención preventiva. Inc. 4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.

LEY 599 DE 2000: “Por medio de la cual se expide el Código Penal”

- **Artículo 1.** Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana.
- **Artículo 3.** Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.

- **Artículo 5.** Funciones de la medida de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación.

- **JURISPRUDENCIA**

SENTENCIA T-153 DE 1998: Primera Declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucionales en el Sistema Penitenciario y Carcelario

SENTENCIA T-388 DE 2013: Segunda Declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucionales en el Sistema Penitenciario y Carcelario.

Sentencia T-762 DE 2015: Reafirmación del Estado de Cosas Inconstitucionales en el sistema Penitenciario y Carcelario.

Sentencia SU-122 DE 2022: Extensión del Estado de Cosas Inconstitucionales en los Centros de Detención Transitorios.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Los Centros Penitenciarios, Carcelarios y de Detención Transitoria son instituciones que tienen como presupuesto fundamental y constitucional garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como también contribuir a la resocialización de las personas privadas de la libertad, esto implica que *“la persona privada de la libertad tenga una actividad al interior del establecimiento de reclusión y eventualmente reporte algunos beneficios económicos por el trabajo desarrollado, sino también para generar un puente hacia la vida en libertad, con la aprehensión de algún arte u oficio que le permita devengar recursos por fuera de los muros de la cárcel, desarrollando una actividad legal que lo aleje de la comisión de delitos”*³⁵

No obstante, la realidad de estos centros es compleja y problemática. Hasta la fecha, la Corte Constitucional por medio de cuatro pronunciamientos, ha evidenciado vulneraciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, situación que derivó, en términos generales, en la declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales del Sistema Carcelario y Penitenciario que aún persiste.

Frente a ello, será apremiante exponer las razones que derivaron en estos pronunciamientos, para posteriormente proponer una serie de medidas que contribuyan, desde el nivel distrital, a la superación de dicha problemática.

³⁵ Hernández Jiménez, N., (2017). LA RESOCIALIZACIÓN COMO FIN DE LA PENA – una frustración en el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Caderno CRH, 30(81), 539-559. <https://doi.org/10.1590/S0103-49792017000300010>

A continuación, se presentan brevemente los cuatro (4) pronunciamientos de la Corte Constitucional:

Sentencia T-153 de 1998.

En la sentencia referenciada, la Corte Constitucional realizó por primera vez un análisis exhaustivo de la situación en los centros penitenciarios y carcelarios del país. En esta oportunidad, el máximo órgano constitucional reconoció la necesidad de incrementar el personal de la guardia penitenciaria, con el objetivo de restaurar el orden y el cumplimiento de la ley, al interior de estos establecimientos. Lo anterior, como *Condicio sine qua non* para garantizar los derechos fundamentales de los reclusos y garantizar el proceso de resocialización al que están destinados durante la privación de su libertad.

Por otra parte, la Corte reconoció la falta de infraestructura adecuada para abordar el hacinamiento en los centros de reclusión y destacó que dicha situación no afectaba exclusivamente a las cárceles del orden nacional, sino que también comprometía a los establecimientos del orden distrital, municipal y departamental. Esta circunstancia impedía el traslado de los reclusos preventivos y condenados a las cárceles correspondientes.

Por lo anterior, la Corte Constitucional declaró que el estado de cosas que presentan las cárceles del país es inconstitucional y **ordenó a los Gobernadores Alcaldes, Concejos distritales y municipales, entre otras medidas, cumplir con la obligación de crear y mantener centros de reclusión propios.**

Sentencia T 388 de 2013

Luego de la declaratoria de 1998 y ante un aumento en la interposición de tutelas que evidenciaban una vulneración masiva, sistemática y generalizada en materia de derechos fundamentales a los reclusos, la Corte constitucional, por segunda ocasión, emite una declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario. Este pronunciamiento tuvo como factores fundamentales y determinantes los siguientes:

“(i) los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema penitenciario y carcelario ha institucionalizado prácticas inconstitucionales; (iv) las autoridades encargadas no han adoptado las medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar efectivamente la vulneración de los derechos; (v) las soluciones a los problemas constatados en el Sistema penitenciario y carcelario, comprometen la intervención de varias entidades, requiere un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; y, por último, (vi) si todas las personas privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se produciría una congestión judicial mayor de la que ya existe actualmente.”

Sentencia T-762 de 2015.

A diferencia de las sentencias referenciadas anteriormente, en esta ocasión y luego de un examen del cumplimiento de las órdenes emitidas, el máximo tribunal constitucional reiteró el Estado de Cosas declarado al constatar que las situaciones fácticas demostradas en dicho pronunciamiento no habían sido superadas; subrayando así que el incumplimiento de dichas órdenes aún persistía.

Según la Corte, las características que contempla el sistema penitenciario y carcelario en el país- y que llevaron desde luego a su declaratoria- lejos de ser fenómenos aislados constituyen problemáticas estructurales que requieren soluciones de fondo y duraderas. Dificultades sistemáticas como el hacinamiento, son producto de la falta de políticas públicas y fortalecimiento institucional que permitan superar la “*desproporción entre las entradas y salidas de las personas privadas de la libertad*”. Asimismo, la construcción de instalaciones penitenciarias deficientes no contemplativas de un número de cupos considerables que, en todo caso, incumplen los estándares mínimos de subsistencia, dignidad y salubridad impiden indiscutiblemente la formulación de una política criminal que, además de cumplir con la responsabilidad del Estado con las personas privadas de la libertad, satisfaga los fines esenciales previstos en la Constitución Nacional

Finalmente, la Corte identificó la problemática de reclusión conjunta entre personas sindicadas y condenadas, atribuyendo como causa estructural la falta de articulación entre las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del Derecho. En consecuencia, la Corte instó a los entes territoriales para iniciar “*todas las acciones administrativas, presupuestales y logísticas necesarias para involucrarse efectivamente en el proceso seguido por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley 65 de 1993 y sus modificaciones.*”

Sentencia SU 122 DE 2022

En esta oportunidad la Corte Constitucional extendió el estado de cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario a los **Centros de Detención Transitoria**. (Inspecciones, Estaciones, Subestaciones de policía, Centros de Atención Inmediata -CAI- y Unidades de reacción Inmediata-URI-).

Esta sentencia constituye la piedra angular del presente proyecto de acuerdo. Mientras que, en los anteriores pronunciamientos el estudio se había centrado en examinar de fondo las vulneraciones de derechos fundamentales al interior de las cárceles y penitenciarias, en esta ocasión el máximo tribunal constitucional enfocó su análisis de constitucionalidad en las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria.

La Defensoría del Pueblo presentó a la Corte el siguiente informe que, al momento de la decisión, evidenció una desproporción entre la capacidad de las estaciones de policía y las URI para custodiar sindicados versus el total de la población reclusa en estos centros de detención Transitoria (Tabla 1). Frente a ello, se estableció la necesidad de *“más cupos para la población privada de la libertad bajo detención preventiva lo que exige la identificación de más fuentes de financiación para que los entes territoriales puedan cumplir con sus obligaciones legales”*

Tipo de centro	Capacidad	Total PPL	Sobrepoblación	Hacinamiento
Estaciones de Policía	5.831	17.477	11.646	200%
URI	1.292	1.834	542	42%
Total:		19.311		

(Tabla 1)

Fuente: Defensoría del Pueblo, a partir de la Sentencia SU 122 de 2022

En consecuencia, la Corte ordenó establecer un plan de acción distribuido en 2 fases; transitoria y definitiva. Para la primera, el objetivo fundamental es disminuir el hacinamiento en los centros de atención transitoria de carácter urgente y de inmediato cumplimiento. Para la segunda fase, el propósito final es erradicar el uso de los centros de detención preventiva y fortalecer la infraestructura adecuada para responder a la capacidad de los sindicados. No obstante, aclaró que *“la ampliación de cupos carcelarios no contradice la regla de la excepcionalidad de la detención preventiva, puesto que, ante una situación de hacinamiento tan grave como la del Sistema Penitenciario y Carcelario, **estas medidas son complementarias y resultan necesarias para atender la crisis**. En ese sentido, como se demostró en el presente proceso, además de una aplicación excesiva de la detención preventiva, existe un déficit de infraestructura destinada a la custodia de personas detenidas preventivamente, por lo que se requiere de medidas en ambos frentes”*.

A continuación, se extraen las acciones ordenadas por la Corte Constitucional **a los entes territoriales** que tienen bajo su jurisdicción a los denominados Centros de Detención Transitorios para el cumplimiento del plan de acción ordenado.

PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVO	ORDEN
FASE TRANSITORIA	<i>Disminuir y acabar con el hacinamiento en las inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y lugares similares. Esto con el fin de atender de forma inmediata la situación indigna en la que se encuentran las personas allí reclusas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta sentencia (...) se deberá garantizar que las personas privadas de la libertad en estos lugares cuenten con las condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficientes; así como la separación tanto entre hombres y mujeres, como entre menores y mayores de edad.</i> ● <i>En el término máximo de un (1) año y medio siguiente a la notificación de esta providencia, dispongan de inmuebles, bien sea que estén bajo su dominio o a través del perfeccionamiento de contratos como el comodato o el arrendamiento, que cuenten con las condiciones de seguridad, salubridad, higiene y sanidad adecuadas, para trasladar temporalmente a personas reclusas en los denominados centros de detención transitoria y disminuir el hacinamiento.</i>
FASE DEFINITIVA	<i>Eliminar de manera definitiva el uso de los denominados centros de detención transitoria y ampliar los cupos en los establecimientos carcelarios a nivel territorial y nacional, con condiciones adecuadas que aseguren los derechos de las personas procesadas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>En el término máximo de un (1) año, contado a partir de la notificación de la presente providencia, todas las entidades territoriales, especialmente los departamentos, el distrito capital y las capitales de departamento, establezcan una planeación de fuentes de financiación de gastos que incluya el aumento de cupos a favor de la población procesada (bajo detención preventiva).</i> ● <i>A la alcaldía mayor de Bogotá (...) de manera coordinada y dentro del plazo máximo de dos (2) años, siguientes a la notificación de esta sentencia, formulen proyectos para la construcción y/o adecuación de infraestructura carcelaria destinada a las personas con detención preventiva en establecimiento de reclusión.</i>

(Tabla 2)

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la Sentencia SU-122/2022.

Aunado a lo anterior, se indagó a la secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta sentencia.

Frente a la orden primera de la fase transitoria, la secretaría de Seguridad y Convivencia y Justicia, precisó que “*aunque la administración distrital no opera las URI ni las estaciones de policía, ha solicitado a la MEBOG que, a través de su Oficina de Bienes Raíces, priorice la intervención de celdas, reconociendo que la Policía Metropolitana de Bogotá debe determinar las estaciones que requieren intervenciones inmediatas. La Secretaría Distrital informa que utiliza recursos del Fondo Cuenta para la Seguridad en la intervención y mantenimiento de equipamientos de seguridad bajo la responsabilidad de la MEBOG, como las estaciones de policía, y realiza mantenimientos en Estaciones de Policía a solicitud de la MEBOG.*” Estas intervenciones efectuadas por la Secretaría de Seguridad, se han desarrollado desde el año 2019 hasta el 2023, cuya inversión ha sido en los siguientes valores:

2019

EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS	VALOR INTERVENCION	INVERSION SALAS RETENIDOS
ESTACION DE POLICIA BOSA	\$ 538.755.276,00	\$ 244.552.305,00
ESTACION DE POLICIA KENNEDY	\$ 572.469.447,00	\$ 207.170.687,00
ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	\$ 552.343.622,00	\$ 403.041.148,00
ESTACION DE POLICIA SUBA	\$ 554.797.844,00	
ESTACIÓN DE POLICIA CANDELARIA	\$ 654.027.950,00	
Estacion Policía Sancristobal	\$ 266.009.381,00	
ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	\$ 569.170.664,00	
Estacion De Policía Usaquen	\$ 16.538.273,00	
ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO E	\$ 385.579.696,00	\$ 385.579.696,00
ESTACION DE POLICIA MARTIRES	\$ 719.397.724,00	\$ 719.397.724,00
ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	\$ 542.129.038,00	\$ 542.129.038,00
ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	\$ 328.466.514,00	\$ 328.466.514,00
ESTACION DE POLICIA SANTAFE	\$ 439.844.041,00	\$ 439.844.041,00
ESTACION DE POLICIA FONTIBON	\$ 19.879.402,00	\$ 19.879.402,00
ESTACION DE POLICIA PUENTE ARANDA	\$ 9.361.859,00	
TOTAL	\$ 6.168.770.731,00	\$ 3.290.060.555,00

2020

EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS	VALOR NTERVENCION	INVERSION SALAS RETENIDOS
ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	\$ 1.231.347.388,42	
ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO	\$ 617.735.768,32	
ESTACION DE POLICIA FONTIBON	\$ 537.100.153,20	\$ 35.816.821,00
ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	\$ 433.212.017,89	\$ 116.820.850,00
ESTACION DE POLICIA BOSA	\$ 14.607.343,21	
ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	\$ 87.711.520,42	
ESTACION DE POLICIA PUENTE ARANDA	\$ 23.765.970,70	
ESTACION DE POLICIA USAQUEN	\$ 59.198.957,10	\$ 15.830.820,00
ESTACION DE POLICIA KENNEDY	\$ 7.231.907,07	
TOTAL	\$ 2.952.712.070,00	\$ 168.468.491,00

(Tabla 3)

Fuente: Respuesta a Derecho de Petición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 9- 02-2024

Para el año 2021 se suscribió el contrato de obra No. 1526, cuya ejecución finalizó el año anterior. La inversión para adecuar las estaciones de policía fue desagregada de la siguiente

2021 a 2023 (contrato de mantenimiento No 1526-2021)

ESTACION DE POLICIA	INVERSIÓN
Candelaria	\$6.396.878
Fontibón	\$47.262.398
Kennedy	\$59.452.156
Barrios Unidos	\$616.433
Chapinero	\$1.587.659
Rafael Uribe	\$20.864.416
Usaquén	\$24.521.103
Tunjuelito	\$36.678.777
Santafé	\$29.470.710
Teusaquillo	\$1.946.258
Engativá	\$35.782.586
Ciudad Bolívar	\$32.494.778

manera:

Usme	\$20.319.484
Mártires	\$7.252.512
Antonio Nariño	\$4.325.232
Suba	\$19.030.228
San Cristóbal	\$2.588.273
Bosa	\$91.716.853
TOTAL	\$492.306.749

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la justicia

(Tabla 4)

Fuente: Respuesta a Derecho de Petición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 9- 02-2024

De lo anterior, se puede inferir una disminución en la inversión destinada a mejorar la infraestructura de las Estaciones de Policía de la Ciudad de Bogotá durante los años 2021, 2022 y 2023, en comparación con los años anteriores. Esta situación es preocupante, ya que las condiciones de salubridad en estos centros continúan siendo deplorables y persiste el incumplimiento de las autoridades para mejorar las condiciones humanitarias mínimas.

Los esfuerzos económicos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para mejorar las condiciones de los sindicados en las estaciones de policía y reducir el hacinamiento no parecen reflejarse en las cifras de hacinamiento en los centros de detención transitoria. Estos últimos no muestran una disminución, situación que se constatará a mayor detalle en el siguiente apartado.

Finalmente, frente a las demás órdenes, de mediano y largo plazo dadas por la Corte, la administración distrital está trabajando en la gestión para cumplir con la orden, pero hasta el momento **no se ha concretado ningún resultado tangible o específico en términos de su cumplimiento.**

HACINAMIENTO EN CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIO EN BOGOTÁ

Según el último informe presentado por la Personería de Bogotá en el año 2023, los centros de detención transitorios bajo jurisdicción del distrito contaban con un hacinamiento del **169%**. Esta cifra corresponde a 3.217 personas privadas de la libertad, de las cuales 2.831 eran imputados y 386 condenados³⁶. Lo anterior, permite concluir que existe un incumplimiento expreso a la Constitución, las normas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, no solo por la carencia de formulación de proyectos para la construcción y adecuación de la infraestructura necesaria para disminuir el hacinamiento, sino también por la falta de garantía de que los condenados permanezcan en las cárceles y centros penitenciarios, separados de los sindicados³⁷.

En dicho informe también se destaca que las estaciones de policía con mayor porcentaje en los niveles de hacinamiento son Usaquén con 810%; Bosa 557%; Kennedy 493%; Usme 415%; y Ciudad Bolívar con 392%, lo cual ha propiciado la fuga de algunos de los sindicados.

No obstante lo anterior, según las cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, a corte de 6 de febrero de 2024 se evidencia un hacinamiento del **144%** en las estaciones de policía y URI de Puente Aranda, respecto de los años anteriores. En consecuencia, se observa que a pesar de la inversión económica de la Secretaría, descrita en el capítulo anterior, no se ha impactado de manera significativa la problemática de hacinamiento de la ciudad.



³⁶ Personería de Bogotá. (28 de agosto de 2023). Hacinamiento propicia la fuga de privados de la libertad en estaciones de policía de Bogotá. Recuperado de <https://www.personeriabogota.gov.co/sala-de-prensa/notas-de-prensa/item/1167-hacinamiento-propicia-la-fuga-de-privados-de-la-libertad-en-estaciones-de-policia-de-bogota>

³⁷ Ley 1709 de 2014: "Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. Art. 21.

(Gráfica 1)

Fuente: Respuesta a Derecho de Petición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 9- 02-2024

Ahora bien, se destaca que de esas 2.999 personas que se encuentran privadas de su libertad, 2.440 son sindicados, mientras que 559 ya cuentan con sentencia condenatoria. Frente a ello, se insiste en el incumplimiento de las autoridades a la normativa que establece la necesidad de que sindicados y condenados se encuentren separados.

Aunado en lo anterior, la Policía Metropolitana de Bogotá, remitió un comparativo de la capacidad instalada en las estaciones de policía y en la URI de Puente Aranda para albergar personas privadas de la libertad frente a la cantidad de personas que realmente se encuentran actualmente:

UNIDAD	CAPACIDAD PLL	REALIDAD	% HACINAMIENTO
COSEC 1	145	397	174%
E-1 USAQUEN	10	84	740%
E-2 CHAPINERO	15	0	-100%
E-11 SUBA	60	182	203%
E-12 BARRIOS UNIDOS	35	42	20%
E-13 TEUSAQUILLO	25	89	256%
COSEC 2	175	623	256%
E-4 SAN CRISTOBAL	35	113	223%
E-S USME	20	95	375%
E-6 TUNJUELTO	20	32	60%
E-18 RAFAEL URIBE URIBE	40	130	225%
E-19 CIUDAD BOLÍVAR	60	253	322%
COSEC 3	210	867	313%
E-7 BOSA	35	211	503%
E-8 KENNEDY	60	414	590%
E-9 FONTIBÓN	45	0	-100%
E-10 ENGATIVÁ	60	204	240%
E-22 TERMINAL	10	38	280%
COSEC 4	325	566	74%
E-3 SANTA FÉ	85	111	31%
E-14 MÁRTIRES	80	101	26%
E-15 ANTONIO NARIÑO	50	39	-22%
URI PUENTE ARANDA 3 PISO E-16	80	234	193%
E-17 CANDELARIA	30	81	170%
PUENTE ARANDA CELDAS 2 PISO	90	27	-70%
PUENTE ARANDA CELDAS 2 PISO SUIN	155	256	65%
PUENTE ARANDA CELDAS 1 PISO SUIN	127	204	61%
TOTAL	1227	2940	PORCENTAJE DE HACINAMIENTO TOTAL.

(Tabla 5)

Fuente: Elaboración propia, a partir de la respuesta de petición de la MEBOG, 22 de Feb. 2024

De estas cifras, es preocupante la situación de hacinamiento que se vive en las Estaciones de:

- Usaquén (740%),
- Kennedy (590%)
- Bosa (503%)
- Usme (375%)
- Ciudad Bolívar (322%)
- Teusaquillo (256%)
- Engativá (240%)
- Rafael Uribe Uribe (225%)
- San Cristóbal (223%)
- Suba (203%)

Toda vez que se encuentran por encima del ponderado general de hacinamiento de los centros de detención transitoria. Así mismo, estas localidades resultan ser las más grandes en términos de población, lo que implica una necesidad urgente de atender la problemática.

Además, según la Policía Metropolitana de Bogotá en respuesta a derecho de petición del 22 de febrero de 2024³⁸, se constató que actualmente hay 379 policías extraídos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) destinados a la custodia de personas privadas de la libertad. Lo anterior no solo implica el uso de efectivos de la Policía Nacional en labores ajenas a sus funciones constitucionales y legales, sino también la disminución de estos efectivos para contribuir, desde las calles, a la crisis de seguridad que azota a la ciudad y la conformación de 190 cuadrantes.

Finalmente, luego de constatar que el problema de hacinamiento en los centros de detención transitorios en Bogotá no ha contado con los esfuerzos suficientes ni ha experimentado una reducción significativa que permita no solo la implementación de las medidas obligatorias establecidas por la Corte Constitucional, sino también garantizar materialmente el estricto cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos y estándares internacionales, que exigen un cupo carcelario por cada 250 habitantes, y en este sentido, sumando los cupos que se tienen en las estaciones de policía, URI de Puente Aranda, cárcel distrital, centro especial de reclusión y establecimientos de reclusión del orden nacional: Modelo, Picota y

³⁸ Respuesta derecho de petición Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) febrero 2024.

Buen Pastor, Bogotá cuenta con 12.273 cupos, por lo cual el estándar se ubica en un cupo carcelario por cada 650 habitantes aproximadamente.

En consecuencia, resulta imperativo que el Concejo de Bogotá asuma la vocería y ordene las medidas pertinentes mediante de un acuerdo distrital para abordar y contribuir desde el Distrito Capital la superación de la violación sistemática de los derechos humanos que persiste luego de 26 años de la primera declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en el Sistema Carcelario y Penitenciario, coadyuvando de esta manera a su levantamiento.

Diagnóstico en los Centros de Detención Transitoria.

Es necesario realizar visitas a los centros de detención transitoria por cuanto este ejercicio no solo permitirá arrojar un resultado sobre la calidad de vida de los privados de la libertad, sino también facilitará la identificación de los desafíos que enfrenta el Distrito de cara a la administración de los centros de detención para personas detenidas preventivamente³⁹. Así pues, a partir del análisis detallado de la capacidad de detención, las condiciones de vida de los reclusos, los costos asociados con la operación y el grado de cumplimiento de los estándares de derechos humanos, se podrá orientar eficazmente la planificación y construcción de la infraestructura necesaria, en aras de garantizar una respuesta adecuada a las demandas actuales y la creación de instalaciones que respeten y promuevan los derechos fundamentales de quienes se encuentran bajo detención preventiva.

Frente a ello, es necesario que la personería de Bogotá acompañe estas visitas con la finalidad de verificar la protección de los derechos humanos, el estado de las plantas físicas, el trato otorgado a los privados de la libertad, el estado higiénico y sanitario, las instalaciones de preparación de alimentos y su manipulación. En síntesis, en cumplimiento de su deber constitucional y legal⁴⁰ verifiquen las condiciones dignas de reclusión.

Alianzas público-privadas como herramienta para abordar el hacinamiento

A pesar de que la Ley 2197 de 2022, en su artículo 64, otorgó la posibilidad de realizar los diseños, construcción y dotación de la infraestructura carcelaria por medio de asociaciones público-privadas, a la fecha del presente acuerdo, en el distrito capital no se han realizado acciones tendientes a la implementación de esta clase de esquemas como alternativas de financiación con el objetivo de reducir el hacinamiento y garantizar condiciones humanitarias. En palabras de Bedoya & Vásquez (2020) este tipo de asociaciones constituyen una *“solución viable y definitiva al hacinamiento carcelario, siempre y cuando se implemente un modelo que vaya acorde a las necesidades de nuestro país. Además, es un tipo de contrato que ha sido utilizado de manera exitosa en otros proyectos que buscan darle desarrollo al país, razón por la cual, (...) la infraestructura carcelaria no sería la excepción.”*⁴¹

³⁹ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2010). Medidas Privativas y No Privativas de la Libertad: El Sistema Penitenciario. Manual de Instrucciones para la Evaluación de la Justicia Penal. Viena. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimerevention/The_Prison_System_Spanish.pdf

⁴⁰ Art. 118 de la Constitución Política de Colombia; Art. 118 y 168 de la Ley 65 de 1993; resolución 993 de 2020 emitida por la Personería de Bogotá

⁴¹ Bedoya Cruz, M., & Vásquez Naranjo, M. (2020). La viabilidad de las asociaciones público-privadas para el tratamiento penitenciario en Colombia: Monografía de grado. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Abogado. Director: Andrés Felipe Duque Pedroza, Doctor en Derecho. Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Recuperado de:

IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En compañía de la ciudadanía, se llevaron a cabo visitas a las estaciones de policía de Usaquén y Suba, donde se verificó la persistencia de un elevado nivel de hacinamiento, así como también la carencia de instalaciones que cumplan con las condiciones mínimas humanitarias. Además, se constató que uniformados de la Policía tenían a cargo la vigilancia de personas condenadas, quienes, de conformidad con la normativa interna, deberían estar bajo custodia del INPEC y separadas de aquellas privadas de la libertad preventivamente.



V. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y

el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales

vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

(...)

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que el presente proyecto de acuerdo al dictar medidas generales para la descongestión de los Centros de Detención Transitorios que se encuentran bajo la jurisdicción del Distrito Capital, no genera impacto fiscal para las finanzas del Distrito. Se traza es una ruta de acción a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para atender la problemática identificada.

V. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

La inseguridad, el limitado acceso a la justicia, la vulneración de derechos humanos para los privados de la libertad, la inadecuada infraestructura y la ausencia de fortalecimiento institucional constituyen factores que dificultan el desarrollo sostenible de la ciudad de Bogotá.

Por lo tanto, el presente proyecto de acuerdo tiene como propósito contribuir en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente con el objetivo No.

16: "Paz, Justicia, e Instituciones Sólidas"⁴². Este objetivo no solo busca proteger las garantías fundamentales de las personas privadas de la libertad propiciando un ambiente adecuado para su resocialización, sino también fortalecer las instituciones distritales para crear la capacidad de prevenir la reincidencia de aquellos en actividades delictivas.

Así las cosas, al establecer una serie de medidas que permitan fortalecer los centros de detención transitorios, con miras a reducir el hacinamiento, se implanta un enfoque integral al presente Proyecto de Acuerdo que pretende no solo abordar los desafíos actuales, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible y equitativo en la ciudad de Bogotá.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, titulado "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", fue aprobado por el Concejo de Bogotá mediante el acuerdo distrital 761 de 2020. En su artículo 15, se establecieron una serie de programas para ejecutar en concordancia con la política pública delineada en dicho acuerdo. Uno de los programas destacados es el Programa No. 47, que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y garantizar el pleno cumplimiento de sus derechos humanos.

En este contexto, el presente proyecto de acuerdo se enmarca y guarda una estrecha relación con el Plan Distrital de Desarrollo, ya que busca implementar medidas destinadas a contribuir significativamente a la disminución de las condiciones de hacinamiento en la ciudad de Bogotá. Como se ha señalado previamente, el hacinamiento persiste y experimenta un aumento gradual en las estaciones de policía y los Comandos de Atención Inmediata (CAI). Esta situación no solo vulnera los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que también dificulta la labor de las autoridades penitenciarias y policiales.

Estas medidas no solo favorecen el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo, sino que también facilitan la implementación de una estrategia específica orientada a recopilar información actual y específica sobre los niveles de hacinamiento en los Centros de Atención Inmediata. A partir de estos elementos, se espera que el Gobierno Distrital adopte los instrumentos jurídicos dispuestos por la ley para estudiar la viabilidad de fortalecer la infraestructura carcelaria, asegurando que cumpla con los estándares mínimos para el respeto de los derechos humanos.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro democrático

⁴² Objetivos de Desarrollo Sostenible; Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/>

PROYECTO DE ACUERDO N° 881 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA DESCONGESTIÓN DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA QUE ESTÁN BAJO LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

Artículo 1: Objeto: El presente acuerdo tiene como objeto la adopción de medidas para la descongestión de los Centros de Detención Transitorios que se encuentran bajo la jurisdicción del Distrito Capital, buscando mejorar las condiciones de detención y fortalecer el sistema penitenciario de la ciudad de Bogotá D.C.

Artículo 2: Definición. Para efectos del presente acuerdo, se entenderá como Centro de Detención Transitoria (CDT), todos aquellos espacios físicos destinados para la detención preventiva de personas privadas de la libertad (PPL); capturadas y con medida de aseguramiento, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C.

Artículo 3: Diagnóstico. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, realizará una evaluación diagnóstica del estado de los Centros de Detención Transitoria ubicados en el Distrito Capital con el fin de identificar y abordar necesidades de infraestructura que contribuyan a la reducción del hacinamiento, atendiendo a los estándares internacionales vigentes.

Parágrafo: La evaluación deberá abordar los siguientes aspectos en particular, sin perjuicio de otros que se consideren pertinentes dentro del marco de la metodología técnica y específica que adopte la Administración Distrital:

- a. Capacidad total en cada CDT.
- b. Número total de PPL en cada CDT.
- c. Niveles de hacinamiento en cada CDT.
- d. Condiciones mínimas de habitabilidad en cada CDT.
- e. Estado de la infraestructura y mobiliario de cada CDT.
- f. Costo de operación de cada uno de los CDT.
- g. Número de custodios por turno en cada CDT.

Parágrafo Transitorio: El diagnóstico deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación del presente acuerdo y contará con el acompañamiento de la Personería de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud, sin perjuicio de las demás entidades que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estime pertinente.

Artículo 4. Sistema Distrital de Información y Seguimiento al Hacinamiento en Centros de Detención Transitoria. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia adelantará las gestiones para el diseño, implementación, mantenimiento y actualización de un Sistema Distrital de Información y Seguimiento al Hacinamiento en Centros de Detención Transitoria (SIDH-CDT). Este sistema, de acceso público y en tiempo real, permitirá el monitoreo continuo de las condiciones de hacinamiento y el cumplimiento de los derechos fundamentales de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en Unidades de Reacción Inmediata (URI), estaciones de policía, centros de reclusión transitoria y cárceles distritales.

Parágrafo: Para garantizar la integralidad y la actualización permanente del SIDH-CDT, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia podrá suscribir convenios interadministrativos y acuerdos de intercambio de información con la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Policía Metropolitana de Bogotá, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y demás entidades que se consideren pertinentes.

Artículo 5: Plan Progresivo de Deshacinamiento Distrital. La administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, dentro de los tres (3) meses siguientes a la evaluación que trata el artículo anterior, establecerá un Plan Progresivo de Deshacinamiento en los Centros de Detención Transitoria bajo la jurisdicción del Distrito Capital.

Parágrafo El Plan Progresivo de Deshacinamiento Distrital (PPDD) incluirá medidas para abordar las siguientes problemáticas, sin menoscabo de aquellas que se identifiquen en el marco de la evaluación diagnóstica.

- a. Traslado de personas condenadas a centros carcelarios.
- b. Vulneración a Derechos Fundamentales de los PPL.
- c. Condiciones precarias de salubridad al interior de los CDT.
- d. Extranjeros privados de la libertad no identificados.
- e. Violencia, motines e intento de fuga en los CDT.
- f. Personal inadecuado y no autorizado para la custodia de PPL.

Artículo 6: Sin perjuicio de las medidas que trata el artículo anterior, se exhorta a la Administración Distrital a la construcción de un nuevo centro de reclusión para aquellas personas privadas preventivamente de su libertad.

Artículo 7: La Administración Distrital diseñará, formulará e implementará una estrategia para constituir Alianzas Público-Privadas (APP) como instrumento para la vinculación de capital privado en la financiación de la infraestructura necesaria para disminuir el hacinamiento en los Centros de Detención Transitorios del Distrito Capital.

Artículo 8: La Alcaldía Mayor de Bogotá, en colaboración con entidades gubernamentales y privadas, promoverá y financiará programas preventivos destinados a abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo, con el fin de reducir la incidencia de delitos y, en consecuencia, la necesidad de detención preventiva.

Artículo 9: Mecanismos de Supervisión. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, establecerá mecanismos de supervisión, monitoreo y seguimiento en aras de garantizar los derechos fundamentales de los sindicados durante su permanencia en los Centros de Detención Transitorios, incluyendo condiciones de alimentación, salubridad, higiene y sanidad.

Artículo 10: Informes Periódicos. La Alcaldía Mayor de Bogotá presentará un informe cada doce (12) meses al Concejo de Bogotá, detallando las acciones tomadas, los avances y resultados de cumplimiento a las disposiciones del presente acuerdo.

Artículo 11: Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y Cúmplase

H.C JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO N° 882 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y EXHIBICIÓN DEL CAR AUDIO Y TUNING COMO EXPRESIÓN CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL DISTRITO CAPITAL"****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer medidas para la promoción, reconocimiento y fomento del tuning como una manifestación cultural que impulsa la economía en el Distrito Capital.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las

demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Artículo 95. *La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. (...)*

- 8. *Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;*

Bloque de Constitucionalidad:

Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo 22. *Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a (...) la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.*

Artículo 27. 1. *Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. (...).*

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Artículo 6. *Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y **cultural** constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.*

Artículo 15.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;(...)

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

De orden legal:

Ley General de Cultura - Ley 1185 de 2008 (por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.)

Artículo 1: *Modifíquese el artículo 4° de la Ley 397 de 1997 el cual quedará, así: (...)*

a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.

Para el logro de los objetivos de que trata el inciso anterior, los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las comunidades, grupos sociales y poblacionales incorporados a estos, deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo y asignarán los recursos para la salvaguardia, conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural; (...)

De orden Distrital:

Acuerdo Distrital 257 de 2006. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Artículo 74. Misión del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. El Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo tiene la misión de crear y promover condiciones que conduzcan a incrementar la capacidad de producción de bienes y servicios en Bogotá, de modo que se garantice un soporte material de las actividades económicas y laborales que permitan procesos productivos, de desarrollo de la iniciativa y de inclusión económica que hagan efectivos los derechos de las personas y viables el avance social y material del Distrito Capital y sus poblaciones, en el marco de la dinámica ciudad región.

Artículo 90. Misión del Sector Cultura, Recreación y Deporte. El Sector Cultura, Recreación y Deporte tiene como misión garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos a la cultura, a la recreación y al deporte de los habitantes del Distrito Capital, así como fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo.

Para los correspondientes efectos se entenderá la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan el conglomerado humano que habita en el Distrito Capital y a sus distintos sectores y comunidades y que engloba además de las artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y bajo el reconocimiento de que la cultura es por su propia naturaleza, dinámica y cambiante.

Artículo 94. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera, que tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella adscritas y vinculadas y la sociedad civil. (...).

f. Impulsar la formación y gestión de actividades y programas artísticos, culturales, deportivos y de alto rendimiento, acorde con los planes sectoriales y con el plan de desarrollo económico y social y de obras públicas del Distrito Capital. (...)

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

SINOPSIS HISTÓRICA DEL TUNING

El término “tuning” proviene del inglés “to tune”, que significa “afinar” o “ajustar”. Según la Real Academia Española, en su tercera acepción, “tunear” se refiere a “adaptar algo, especialmente un vehículo, a los gustos o intereses personales”. En el ámbito automotriz, el tuning implica la modificación de vehículos en aspectos mecánicos, estéticos y sonoros para reflejar la personalidad y preferencias de su propietario.

Aunque no existe una fecha exacta que marque el inicio del tuning, se reconoce que esta práctica comenzó a ganar popularidad en Estados Unidos después de la Gran Depresión de los años 30. Tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron movimientos como el “Hot Rod” y el “Custom”, donde los jóvenes estadounidenses personalizaban sus vehículos para destacar y expresar su individualidad. Paralelamente, en barrios latinos y afroamericanos de Los Ángeles, nació el estilo “Lowrider”, caracterizado por suspensiones bajas y ruedas pequeñas que permitían que los autos se desplazaran a baja velocidad, reflejando una estética única.



Escena tradicional de la cultura *lowrider*.



Vehículo con estilo *Hot rod*?

Fuente: <https://autosblogmexico.com/respuestas/lowrider-moda-o-cultura-ta2094>,
https://www.tuningblog.eu/es/kategorien/tipps_tuev-de

En Europa, durante las décadas de 1960 y 1970, países como Alemania vieron un auge en la modificación de vehículos, inicialmente enfocada en competencias automovilísticas y posteriormente extendida a vehículos de uso cotidiano. En Asia, especialmente en Japón, el tuning se vinculó estrechamente al “drifting”, aprovechando la presencia de grandes fabricantes como Toyota, Nissan y Honda, que facilitaban mejoras en rendimiento y diseño.



Coches estilo Import, Honda civic eg y ek.

Drift por las montañas de Japón, época de los 90

Fuente: <https://autosblogmexico.com/respuestas/lowrider-moda-o-cultura-ta2094>,
https://www.tuningblog.eu/es/kategorien/tipps_tuev-de

En Colombia, aunque hay poca documentación sobre los inicios del tuning, se reconoce que esta cultura tomó impulso a principios de los años 2000, influenciada por la saga cinematográfica “Rápidos y Furiosos”, que destacó los autos modificados. Ciudades como Bogotá y Cali fueron pioneras en adoptar esta tendencia, con entusiastas que, independientemente de la marca o modelo de sus vehículos, comenzaron a realizar modificaciones inspiradas en estilos internacionales. Este movimiento se expandió rápidamente a otras ciudades principales del país.

El tuning ha evolucionado hasta convertirse en una expresión artística y un sector económico en crecimiento. No solo implica la personalización de vehículos en términos de carrocería, iluminación y sonido, sino que también ha dado lugar a un mercado de repuestos y servicios especializados. En la actualidad, esta práctica es reconocida como un movimiento cultural que fomenta la creatividad y la innovación tecnológica en el sector automotriz.

A continuación, se abordarán tres dimensiones clave del tuning en Colombia:

1. Dimensión Cultural

El tuning es una manifestación cultural que refleja la identidad y creatividad de quienes lo practican. Para muchos aficionados, modificar un vehículo es una forma de expresión personal, donde cada detalle—desde la pintura hasta la mecánica— representa una visión única del propietario. En este sentido, el tuning trasciende la simple modificación de automóviles para convertirse en una subcultura con un lenguaje propio y un sentido de comunidad.

En eventos y exhibiciones de tuning, se reúnen personas de diversas edades y contextos sociales, lo que convierte a esta práctica en un punto de encuentro intergeneracional. En Colombia, eventos como el “Campeonato Nacional de Car Audio y Tuning”⁴³ han ganado reconocimiento nacional e internacional, evidenciando que el tuning es más que una afición: es una manifestación artística y una industria en crecimiento. Por ejemplo, en agosto de 2023, Medellín fue sede de este campeonato durante la Feria de las Flores, consolidando su relevancia en el ámbito cultural y económico del país.

⁴³ https://latiquetera.com/evento/campeonato-nacional-de-car-audio-y-tuning-2023?utm_source=chatgpt.com

Además, el tuning fomenta la disciplina y el aprendizaje técnico. Los aficionados adquieren conocimientos en mecánica, aerodinámica, electricidad y diseño, lo que les permite desarrollar habilidades que pueden traducirse en oportunidades laborales dentro del sector automotriz.

2. Dimensión Económica

El tuning no solo es una actividad recreativa, sino también un sector que impulsa la economía. En Colombia, existen cientos de talleres especializados en personalización de vehículos, los cuales generan empleo y dinamizan la industria de autopartes. La demanda de repuestos, sistemas de sonido, pintura especializada y accesorios ha dado lugar a un mercado sólido que beneficia a fabricantes, importadores y comerciantes.

Adicionalmente, los eventos de tuning en Colombia han demostrado tener un impacto económico significativo en las ciudades donde se realizan, como Medellín y Cali. Aunque no se dispone de estadísticas específicas exclusivamente para eventos de tuning, la contribución general de los eventos de automovilismo y motociclismo a la economía local es notable.

Por ejemplo, en Medellín, eventos de gran magnitud en el sector automotor y motociclístico han generado ingresos considerables. En 2024, la Feria de las 2 Ruedas⁴⁴ aportó \$22,6 millones de dólares, consolidándose como uno de los eventos más importantes para el sector.

En Cali, eventos relacionados con la cultura del automovilismo, como el Cali Exposhow Car y ferias de exhibición de autos personalizados⁴⁵, han contribuido a la economía local. La realización de estos eventos impulsa el turismo y la ocupación hotelera, similar al impacto registrado en la Feria de Cali, donde los ingresos turísticos totales ascendieron a \$49.525.390.000.

Si bien estos datos corresponden a eventos de índole automovilística y motociclística en general, reflejan la capacidad de las ciudades colombianas para albergar exhibiciones de vehículos modificados que generan ingresos por inscripciones, patrocinios, turismo y ventas de productos especializados. Es razonable inferir que los eventos de tuning, al atraer a miles de asistentes y entusiastas del automovilismo, contribuyen de manera similar al crecimiento del turismo temático y al desarrollo económico local en ciudades de todo el país.

En este contexto, es fundamental que el Distrito reconozca y apoye el tuning como una actividad económica y cultural legítima, promoviendo su desarrollo a través de políticas que faciliten la formalización de talleres y la realización de eventos.

⁴⁴https://www.radionacional.co/actualidad/economia/90-millones-de-dolares-el-impacto-economico-de-los-grandes-eventos-de-este-ano?utm_source=chatgpt.com

⁴⁵https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/184317/67-feria-de-cali-cerro-con-cifras-historicas-en-asistencia-participacion-de-artistas-reduccion-de-violencia-e-impacto-economico-en-la-ciudad/?utm_source=chatgpt.com

3. Dimensión Tecnológica

El tuning ha sido un motor de innovación en la industria automotriz. La búsqueda de mejoras en desempeño, aerodinámica y eficiencia energética ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los vehículos. En Colombia, los aficionados al tuning han adoptado sistemas avanzados de inyección electrónica, frenos de alto rendimiento y tecnologías de iluminación LED, contribuyendo a la modernización del parque automotor.

El tuning ha evolucionado más allá de la mera personalización estética o el aumento del rendimiento, incorporando prácticas que promueven la sostenibilidad y la eficiencia energética. Una de estas prácticas es el eco tuning⁴⁶, también conocido como ecotuning o eco remapping, que se centra en optimizar la eficiencia del motor para reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones contaminantes. Esta técnica avanzada ajusta parámetros del motor para lograr una combustión más eficiente, beneficiando tanto al medio ambiente como al rendimiento del vehículo.

Además, la tendencia hacia soluciones más sostenibles ha llevado al tuning a evolucionar, incorporando modificaciones que mejoran la eficiencia energética y reducen las emisiones. Esto fusiona el arte del tuning con la responsabilidad ambiental, demostrando que la personalización vehicular puede alinearse con objetivos ecológicos.

En el contexto de los vehículos eléctricos (EVs), los propietarios están adoptando modificaciones estéticas como envolturas personalizadas, body kits y llantas aerodinámicas⁴⁷. Estas mejoras no solo realzan la apariencia del vehículo, sino que también contribuyen a la eficiencia energética al optimizar la aerodinámica y reducir la resistencia al viento.

CONCLUSIÓN

El tuning ha evolucionado más allá de una simple práctica de personalización vehicular para convertirse en un fenómeno cultural, económico y tecnológico con un impacto significativo en Colombia. Como se ha expuesto, esta actividad no solo fomenta la creatividad y la identidad de sus seguidores, sino que también genera empleo, impulsa el turismo y promueve el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector automotriz.

Desde una perspectiva económica, los eventos de tuning han demostrado su capacidad para dinamizar el comercio local, atraer visitantes y fortalecer la industria de autopartes y servicios especializados. A nivel tecnológico, la integración de innovaciones en aerodinámica, eficiencia energética y reducción de emisiones refleja el potencial del tuning para alinearse con las tendencias globales de movilidad sostenible.

⁴⁶ https://ecupro.es/eco-tuning-optimizacion-eficiente-para-tu-vehiculo/?utm_source=chatgpt.com

⁴⁷ https://www.elcarrocolombiano.com/reportajes/guia-y-tendencias-del-tuning-asi-es-el-mundo-de-la-personalizacion-de-carros/?utm_source=chatgpt.com

Dado su impacto multidimensional, es fundamental que el Distrito reconozca y promueva el tuning como una actividad legítima y regulada, asegurando su desarrollo en un marco que fomente la formalización de talleres, la realización de eventos y la adopción de prácticas responsables. Con un enfoque adecuado, el tuning puede consolidarse como un sector que no solo genera oportunidades económicas y culturales, sino que también contribuye a la modernización del parque automotor y al crecimiento sostenible de la ciudad.

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

H. Concejal de Bogotá D.C.

Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO N° 882 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y EXHIBICIÓN DEL CAR AUDIO Y TUNING COMO EXPRESIÓN CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL DISTRITO CAPITAL"****EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos para la promoción, fomento y exhibición del Car Audio y Tuning, como expresiones de innovación, personalización vehicular y cultura urbana en el Distrito Capital.

Artículo 2. La Administración Distrital en materia de promoción, fomento y exhibición del Car Audio y Tuning en Bogotá, tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:

- 1. Reconocimiento:** Reconocer y visibilizar la labor de los profesionales, aficionados y empresarios del sector del Car Audio y Tuning en Bogotá, promoviendo su aporte a la innovación y cultura automotriz.
- 2. Zonas de encuentro:** Promover dentro de los eventos del Distrito, como el Festival de Verano, espacios de integración y cultura urbana, que permitan a la comunidad conocer e interactuar con las tendencias del car audio y tuning en un ambiente seguro, regulado y promovido por las autoridades distritales, fomentando así la creatividad, la participación ciudadana y el uso adecuado del espacio público.

- 3. Reactivación económica:** Incentivar la economía local a través de la participación de emprendedores, talleres y comerciantes relacionados con el sector.
- 4. Movilidad sostenible y segura:** Crear conciencia sobre la movilidad sostenible, fomentando el respeto por las normas de tránsito y el adecuado uso de las modificaciones vehiculares dentro del marco legal vigente.

Artículo 3. La Administración Distrital coordinará con las entidades competentes la regulación y autorización de espectáculos públicos artísticos, culturales, recreativos y deportivos relacionados con el Car Audio y Tuning en el Distrito Capital. Se definirá e implementará una estrategia de articulación institucional e intersectorial para facilitar y fomentar la realización de estos eventos en el Distrito Capital, optimizando los trámites y procesos administrativos necesarios.

Artículo 4. Establézcase la celebración del día del Car Audio y Tuning el último domingo del mes julio de cada año.

Artículo 5. La programación y difusión de los eventos artísticos, deportivos y culturales de Car Audio y Tuning se dará a conocer a través de los canales institucionales disponibles, garantizando el acceso a información sobre las actividades y escenarios dispuestos para su realización.

Artículo 6. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su promulgación.

Publíquese y Cúmplase

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Concejal de Bogotá
Partido Centro Democrático

FE DE ERRATAS PROYECTO DE ACUERDO N° 882 DE 2025**PRIMER DEBATE****FE DE ERRATAS****I. IMPACTO FISCAL**

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

El presente Proyecto de Acuerdo no genera impacto fiscal, toda vez que se limita a establecer lineamientos para promover, fomentar e incluir el Car Audio y el Tuning dentro de las exhibiciones y eventos existentes en la oferta cultural y recreativa del Distrito Capital, sin implicar la creación de nuevas obligaciones presupuestales ni la destinación de recursos adicionales, siendo de carácter programático y orientador para las entidades competentes.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

Concejal de Bogotá, D.C.

Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO N° 883 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS TRANQUILAS EN BOGOTÁ D.C. COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas en Bogotá D.C., con el fin de prevenir y mitigar los efectos nocivos de la contaminación acústica sobre la salud, la intimidad y la tranquilidad de la ciudadanía.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

Artículo 2. *Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*

Artículo 49. *La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.*

Artículo 79. *Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.*

Bloque de Constitucionalidad:**Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:****Artículo 12**

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

De orden legal:

Ley 99 de 1993: "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones."

ARTÍCULO 1. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: (...)

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.

Ley 1801 de 2016: "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana"

ARTÍCULO 33. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse:

1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:

a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo

b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;

c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten la tranquilidad de las personas. (...)

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1	Multa General tipo 3; Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.

Ley 232 de 1995: “Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales”.

Artículo 2o. *No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos:*

a) *Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio.*

Decreto 948 de 1995: REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.

Artículo 14º.- *Norma de Emisión de Ruido y Norma de Ruido Ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente fijará mediante resolución los estándares máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para todo el territorio nacional.*

Dichos estándares determinarán los niveles admisibles de precisión sonora, para cada uno de los sectores clasificados por el artículo 15 de este Decreto, y establecerán los horarios permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta.

Las normas o estándares de ruido de que trata este artículo se fijarán para evitar efectos nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los bienes de uso público y del medio ambiente.

Las regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que generada por fuentes móviles o fijas, aún desde zonas o bienes privados, trascienda a zonas públicas o al medio ambiente.

Artículo 15º.- *Clasificación de sectores de Restricción de Ruido Ambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambiental el Ministerio del Medio Ambiente atenderá a la siguiente sectorización:*

- 1) Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos.*
- 2) Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.*
- 3) Sectores C. Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.*

4) Sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso.

Artículo 112º.- *Visitas de Verificación de Emisiones.* Las fuentes fijas de emisión de contaminación del aire o generación de ruido, podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la autoridad ambiental competente o por los auditores a quienes la función técnica de verificación les haya sido confiada, los cuales al momento de la visita se identificarán con sus respectivas credenciales, a fin de tomar muestras de sus emisiones atmosféricas.

Parágrafo 1º.- La renuencia por parte de los usuarios responsables, a tales inspecciones, dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes.

Parágrafo 2º.- La autoridad ambiental competente, podrá solicitar a cualquier usuario, cuando lo considere necesario, una muestra del combustible empleado para realizar un análisis de laboratorio.

Parágrafo 3º.- Las autoridades ambientales podrán contratar con particulares la verificación de los fenómenos de contaminación cuando no dispusieren del personal o de los instrumentos técnicos para realizar las inspecciones técnicas o los análisis de laboratorio requeridos. Los costos de las verificaciones y análisis técnicos serán de cargo de los agentes emisores a quienes se hace la inspección o la verificación.

Ley 1333 de 2009. POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

ARTÍCULO 5º. *Infracciones.* Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, las demás normas ambientales vigentes y en los actos administrativos con contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

De orden Distrital:

Acuerdo 19 de 1996: Por el cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

Artículo 8º.- *Funciones de las Entidades del SIAC.* Las entidades incorporadas por este acuerdo al Sistema Ambiental del Distrito Capital, desarrollarán las siguientes funciones en materia ambiental:

SECRETARÍA DE GOBIERNO

(...) A nivel local corresponde a las alcaldías locales, en coordinación con el DAMA, y con el apoyo de la Policía Nacional, adelantar el control al cumplimiento de las normas ambientales en su jurisdicción, especialmente las que se refieren al uso del espacio público, el control del ruido, la contaminación visual y al tráfico ilegal de fauna y flora, y coordinar con las demás entidades distritales la realización de los planes y trabajos que en materia ambiental se desarrollen en su jurisdicción.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Estas entidades, o la(s) que haga(n) sus veces, pertenecen a los grupos uno y tres de las entidades del SIAC definidas en el artículo anterior. Como integrantes del grupo uno de las entidades del SIAC les corresponde principalmente: hacer respetar el espacio público de la ciudad, y controlar y sancionar a los vehículos cuyas emisiones de gases y de ruido excedan los límites permitidos por la normatividad ambiental.

Secretaria de Obras públicas, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Secretaria de Tránsito y Transportes y Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S. A.

Las entidades que hagan sus veces promoverán la movilización de personas y bienes, minimizando los tiempos, las distancias, el gasto energético, la ocupación del espacio y la generación de impactos, especialmente ruido y emisiones. Para esto es preciso partir de una localización racional de las actividades que demanden y las estructuras que ofrezcan esta función; la adecuación de la infraestructura y la conversión tecnológica gradual de la maquinaria empleada, apuntando a privilegiar el sistema integrado de transporte público sobre el particular; las energías menos contaminantes sobre las convencionales y el transporte en bicicleta y peatonal, por encima del automotor.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Para efectos de la justificación del presente Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación de una Política de Calidad Acústica para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”, se seguirá el siguiente orden:

1. Introducción.
2. Contaminación Acústica.
3. Problemática del ruido en Bogotá.
4. Factores que generan contaminación auditiva.
 - a. Bares ilegales
 - b. Metro de Bogotá
5. Contaminación auditiva y salud pública.
6. Necesidad de lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas

1. Introducción

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como propósito establecer los lineamientos para la formulación de una Política de Calidad Acústica en el Distrito Capital, en respuesta a la creciente problemática de contaminación auditiva que afecta significativamente la calidad de vida, la salud pública y el equilibrio ambiental en la ciudad de Bogotá D.C.

La contaminación por ruido, también conocida como contaminación acústica, se ha consolidado como una de las formas más persistentes de deterioro ambiental en contextos urbanos. Este fenómeno, producido por diversas fuentes como el tráfico vehicular, los establecimientos comerciales, la industria, la construcción y el entretenimiento nocturno (especialmente bares que operan ilegalmente), ha sobrepasado en numerosos sectores de la ciudad los niveles permisibles establecidos en la normativa nacional e internacional, sin que exista hasta ahora una política pública integral y articulada que enfrente el problema de forma estructural y con enfoque territorial.⁴⁸

En este contexto, resulta necesario formular una Política de Calidad Acústica que permita diseñar, implementar y monitorear acciones concretas orientadas a prevenir, controlar y mitigar los impactos del ruido, en coherencia con los principios constitucionales de sostenibilidad ambiental, dignidad humana y salud como derecho fundamental. Además, se propone fortalecer el marco institucional del Distrito en esta materia, atendiendo los insumos técnicos disponibles, como el Mapa Estratégico de Ruido (MER), y facilitando la articulación entre las entidades responsables de la salud, el ambiente, la planeación y la convivencia ciudadana.

2. Contaminación Acústica.

La contaminación acústica fue definida en la reciente Ley 2450 de 2025 o Ley Anti Ruido como aquella *“alteración del ambiente con ruidos o vibraciones nocivas, molestas o no deseadas, que impactan en la salud, la calidad de vida y que implican un riesgo para la salud pública o degradan la calidad del ambiente en sus diferentes medios.”* Desde una perspectiva jurídico-técnica, se trata de una definición de carácter amplio o extensivo, en tanto incorpora una variedad de elementos subjetivos y objetivos (como la nocividad, la molestia o el carácter no deseado del ruido), y abarca múltiples supuestos de hecho. Además, el uso de expresiones abiertas como 'calidad de vida', 'riesgo para la salud pública' o 'ambiente en sus diferentes medios' evidencia una intencionalidad legislativa de no restringir la aplicación del concepto a casos taxativos, sino de permitir una interpretación flexible y contextualizada por parte de las autoridades ambientales y judiciales.

Adicionalmente, este enfoque adoptado por la Ley Anti Ruido supone un carácter proteccionista, es decir, trata de delimitar un hecho, generado por un sinnúmero de factores, que inciden directamente en afectaciones graves a la salud y en el entorno en el que vivimos. Dicho enfoque se encuentra acorde con las diversas sentencias de tutela proferidas por la corte constitucional, en el que la contaminación auditiva tiene un carácter pluriofensivo en materia de derechos fundamentales.

⁴⁸ <https://pulsarinstruments.com/es/noticias/la-oms-dice-que-el-ruido-es-uno-de-los-principales-peligros-para-la-salud/>

Al respecto, la Corte Constitucional ha tutelado los derechos fundamentales a la intimidad, a la tranquilidad y a la salud en aquellos casos en los que, por causa de la contaminación por ruido, dichos derechos se han visto afectados. Ello se debe a que la contaminación acústica constituye una intromisión indebida en el espacio privado de las personas y vulnera su tranquilidad, entendida como un derecho fundamental susceptible de protección, en tanto es inherente a la persona humana y tiene un carácter personalísimo, derivado necesariamente del derecho a una vida digna, sin perjuicio de aquellos daños que ocasiona de forma directa a la salud.⁴⁹

A pesar de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del adecuado enfoque adoptado por la denominada Ley Anti Ruido, en Bogotá persiste una problemática generalizada de contaminación acústica, originada en diversas fuentes de emisión sonora. Entre estas se destacan los bares, gastrobares, restaurantes, así como las actividades culturales y deportivas, conciertos, festivales, el uso de armas de fuego, gritos, riñas, equipos de poda, zonas de construcción, entre otros.

3. Problemática del ruido en Bogotá

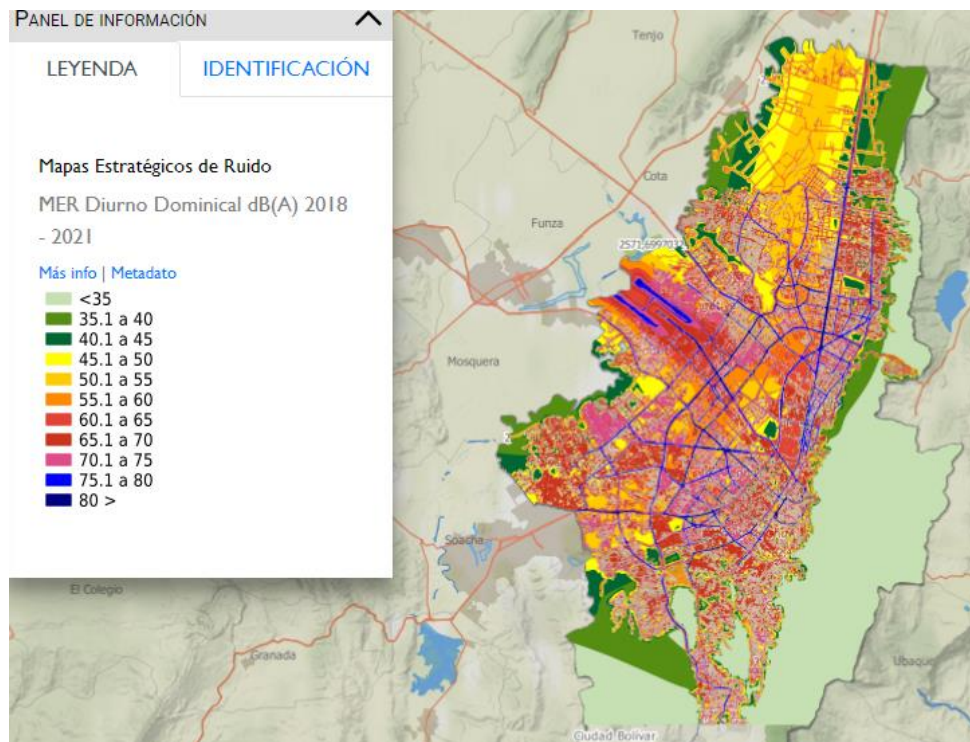
Según datos del Observatorio Ambiental de Bogotá, los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) actualizados para el período 2018-2019 revelan que en las principales vías de la ciudad, como la Avenida Boyacá y la Autopista Norte, los niveles de ruido diurnos superan los 65 dB(A), mientras que en horario nocturno estos niveles siguen por encima de los 70 dB(A)⁵⁰. Estas cifras exceden los estándares permitidos por el Decreto la Resolución 627 de 2006, que establece que el ruido ambiental no debe superar los 70 dB(A) durante el día y 60 dB(A) en la noche para proteger la salud pública⁵¹.

El análisis del Mapa Estratégico de Ruido (MER), disponible en el visor geográfico del Distrito <https://visorgeo.ambientebogota.gov.co>, evidencia que en zonas como Chapinero, Teusaquillo, Suba, Engativá, Barrios Unidos y Kennedy, así como en principales corredores viales como la Avenida Boyacá y la Autopista Norte, los niveles de presión sonora suelen superar los 70 dB(A) en el día y 60 dB(A) en la noche, afectando de manera directa la tranquilidad, el bienestar y la salud de los habitantes.

⁴⁹ Ver sentencias. T.394 de 1997, T-1158/05 y T-672 de 2014

⁵⁰ <https://oab.ambientebogota.gov.co/mapas-de-ruido-ambiental-de-bogota/>

⁵¹ [Cuáles son los niveles de ruido permitidos según la Resolución 0627 de 2006 - Historial de noticias - Secretaría Distrital de Ambiente](#)



Esta situación se ve agravada por la proliferación de bares ilegales y establecimientos nocturnos que operan sin licencia, en contravía de las normas de uso del suelo y los parámetros de emisiones acústicas. La ausencia de control efectivo y vigilancia oportuna ha generado una percepción de impunidad frente a estas conductas, lo que incentiva prácticas lesivas para la convivencia y el derecho al descanso de las comunidades urbanas.

4. Factores que generan contaminación auditiva

Según la Ley 2450 de 2025 denominada Ley contra el ruido en su artículo 8° parágrafo 2°, establece como principales factores de emisión sonora el tráfico vehicular, ferroviario, marítimo, fluvial y aéreo. Además de las actividades económicas de industria, comercio y servicio; así como las realizadas en espacio público, como actividades culturales, turísticas y deportivas. Estos factores inciden especialmente en zonas de uso mixto, donde confluyen áreas residenciales con actividades económicas, afectando la calidad de vida de la población del distrito capital.

En concordancia con lo establecido en la Ley 2450 de 2025, el tráfico vehicular se identifica como la principal fuente de emisión sonora en la ciudad. La circulación continua de automotores, sumada al uso indiscriminado del claxon y al deterioro de la infraestructura vial, genera niveles de presión sonora que frecuentemente superan los límites permitidos por la normativa ambiental. Las vías troncales y arteriales representan puntos críticos de contaminación auditiva, especialmente en zonas de uso mixto, donde coexisten áreas residenciales con actividades económicas.

Por otro lado, las actividades comerciales y de servicios, particularmente aquellas que operan en horario nocturno como bares, discotecas, terrazas y otros establecimientos de entretenimiento, constituyen una fuente relevante de ruido ambiental. La ausencia de licencias adecuadas y de infraestructura con control acústico incrementa significativamente los niveles sonoros durante las horas de descanso nocturno, afectando la calidad de vida de los habitantes y generando conflictos recurrentes entre vecinos, especialmente en sectores residenciales donde estas actividades se desarrollan sin una adecuada regulación.

Asimismo, las obras civiles y el uso de maquinaria pesada asociadas al desarrollo de infraestructura urbana representan un importante factor de emisión sonora. Cuando estas actividades se ejecutan sin medidas de mitigación adecuadas o fuera de los horarios permitidos, impactan de forma negativa la tranquilidad de las comunidades aledañas. Este problema se acentúa en áreas urbanas de uso mixto, donde grandes proyectos constructivos colindan con viviendas, exponiendo a la población a altos niveles de ruido de manera prolongada.

El uso de altavoces, perifoneo y otros dispositivos de amplificación sonora en espacios públicos, con fines comerciales, políticos, sociales o religiosos, también representa una fuente constante de ruido que incide directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Estas prácticas, comunes en centros de barrio, mercados populares y zonas de alta circulación peatonal, afectan principalmente a quienes residen o transitan por estas áreas. La normativa vigente establece límites para este tipo de emisiones, ya que vulneran el entorno acústico y el derecho al descanso.

Finalmente, en sectores donde coexisten zonas residenciales con actividades industriales, el funcionamiento de compresores, generadores, equipos de carga y otras maquinarias sin el debido aislamiento acústico genera un impacto sonoro considerable. La Ley 2450 de 2025 reconoce estas actividades productivas como factores significativos de emisión sonora, que requieren regulación y control técnico para garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar de la población expuesta al ruido industrial.

A lo anterior se suman nuevas fuentes emergentes de contaminación auditiva que, aunque no siempre han sido visibilizadas con la misma intensidad, generan impactos significativos en la vida urbana y requieren atención por parte de las autoridades ambientales y de planeación. Entre estas se destacan la proliferación de bares y establecimientos nocturnos que operan de manera ilegal, sin controles acústicos, así como la implementación de grandes sistemas de transporte masivo, como el metro, cuya operación y construcción también representan un desafío para la gestión del ruido en zonas densamente pobladas.

4.1 Bares ilegales

Una de las problemáticas más sensibles identificadas por las comunidades y las autoridades locales es la operación de bares, discotecas y otros establecimientos nocturnos sin licencia o fuera de los horarios permitidos. Estas actividades suelen desarrollarse en zonas residenciales o mixtas, donde su impacto es particularmente perjudicial para la convivencia, el descanso y la salud de los residentes.

Al no contar con adecuadas medidas de insonorización ni controles técnicos, estos establecimientos superan con frecuencia los niveles máximos de ruido ambiental permitidos por el Decreto 948 de 1995 y la Resolución 627 de 2006, generando conflictos vecinales, deterioro del espacio público y una sensación generalizada de impunidad.

Pese a que la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en conjunto con otras entidades distritales, ha intensificado en los últimos años los operativos de inspección, vigilancia y control (IVC), con el objetivo de cerrar establecimientos que incumplen la normatividad y afectan la tranquilidad ciudadana, las cifras reportadas por las inspecciones de policía demuestran que dichos esfuerzos han resultado ineficaces. Las problemáticas derivadas de estos establecimientos —incluso aquellos que operan de manera legal— continúan vulnerando la tranquilidad de las personas y transgrediendo las normas de policía y convivencia.

Pese a que la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en conjunto con otras entidades distritales, ha intensificado en los últimos años los operativos de inspección, vigilancia y control (IVC) con el objetivo de cerrar establecimientos que incumplen la normatividad y afectan la tranquilidad ciudadana, las cifras reportadas por las inspecciones de policía demuestran que dichos esfuerzos han resultado ineficaces. Las problemáticas derivadas de estos establecimientos —incluso aquellos que operan de manera legal— continúan vulnerando la tranquilidad de las personas y transgrediendo las normas de policía y convivencia.

Uno de los factores más críticos es la contaminación acústica generada por la actividad económica nocturna, especialmente en sectores residenciales o mixtos. Esta situación se ve reflejada en el aumento sostenido de expedientes relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia, tipificados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, particularmente aquellos que afectan la actividad económica regulada en los artículos 92 y 93 del mencionado estatuto. A continuación, se presentan las cifras más relevantes.

CIFRAS DE EXPEDIENTES EN INSPECCIONES DE POLICÍA CON RELACIÓN AL RUIDO

La Ley 2450 de 2025, denominada Ley contra el Ruido, en su artículo 8°, parágrafo 2°, establece como principales fuentes de emisión sonora el tráfico vehicular, ferroviario, marítimo, fluvial y aéreo, así como las actividades económicas del sector industrial, comercial y de servicios. De igual forma, identifica como generadoras de ruido las actividades realizadas en espacio público, tales como eventos culturales, turísticos y deportivos. Estos factores tienen un impacto especialmente negativo en las zonas de uso mixto, donde convergen áreas residenciales con dinámicas económicas, afectando significativamente la calidad de vida y la tranquilidad ciudadana.

En consonancia con lo anterior, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) clasifica las conductas que afectan la tranquilidad, el bienestar y la salud por generación de ruido en dos grandes grupos:

- i) las generadas por establecimientos de comercio en el marco de una actividad económica, y
- ii) las producidas en el vecindario o lugar de habitación urbana o rural:

En cuanto a la afectación por parte de la actividad económica, el **artículo 93** del citado Código dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 93. Comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad que afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:

(...)

3. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su entorno.

(...)

En respuesta a un derecho de petición radicado el **14 de marzo de 2025**, se informó que, a **abril del mismo año**, se encontraban **alrededor de 1.300 expedientes activos** en las **inspecciones de policía** relacionados con infracciones a este artículo, lo que da cuenta del **creciente número de conflictos vecinales y quejas por ruido** derivados del desarrollo de actividades económicas.

Por otra parte, otra conducta que contribuye de manera directa al deterioro del ambiente sonoro de la ciudad es la **inobservancia de los horarios de funcionamiento** establecidos por el Alcalde Mayor para los establecimientos abiertos al público. Esta infracción está contemplada en el artículo 92 del Código de Policía:

ARTÍCULO 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:

(...)

4. Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde.

(...)

En relación con esta infracción, se reportó que, a **mayo de 2024**, existían **3.364** expedientes abiertos en las estaciones e inspecciones de policía. **Para mayo de 2025**, la cifra ascendió a **3.809 expedientes**, lo que representa un incremento del **13,2%** (equivalente a 445 nuevos casos en 11 meses). Este aumento evidencia una tendencia creciente de incumplimiento normativo por parte de algunos establecimientos comerciales y sugiere una mayor necesidad de intervención institucional, así como del fortalecimiento de la capacidad sancionatoria y preventiva de las autoridades distritales.

Por otra parte, frente a aquellas conductas en el vecindario o lugar de habitación urbana o rural, el Código Nacional de Policía dispuso:

ARTÍCULO 33. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse:

1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:

a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo;

b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;

c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten la tranquilidad de las personas

Bajo esta conducta, **entre mayo de 2024 y mayo de 2025, se registró un incremento del 15% en los reportes relacionados con afectaciones por ruido, pasando de 4.207 a 4.837 casos.** Este aumento de 630 reportes no es un simple dato estadístico: es un reflejo directo del deterioro progresivo de las condiciones acústicas en la ciudad y una alerta sobre el debilitamiento de la convivencia ciudadana. Adicionalmente, revela un aumento en las fuentes generadoras de ruido —como fiestas, dispositivos de alto volumen o maquinaria fuera de los horarios permitidos—, sino también una creciente percepción de afectación entre los ciudadanos, lo que a su vez puede derivar en conflictos comunitarios, afectaciones a la salud mental y trastornos del sueño.

Este comportamiento revela un aumento en las fuentes generadoras de ruido —como fiestas, dispositivos de alto volumen o maquinaria fuera de los horarios permitidos—, sino también una creciente percepción de afectación entre los ciudadanos, lo que a su vez puede derivar en conflictos comunitarios, afectaciones a la salud mental y trastornos del sueño. En este contexto, se vuelve urgente fortalecer las acciones institucionales de control, inspección y sanción, con énfasis en las zonas de mayor reincidencia, al tiempo que se impulsa la implementación de políticas públicas integrales en materia de calidad acústica urbana.

4.2 Metro de Bogotá

Una de las problemáticas emergentes más sensibles identificadas por las comunidades y las autoridades locales es la afectación acústica derivada de las obras de infraestructura del sistema de transporte masivo Metro de Bogotá, en particular durante la ejecución de la Primera Línea. Aunque este proyecto representa un avance fundamental para la movilidad de la ciudad, su implementación ha generado un conjunto de externalidades negativas para las poblaciones cercanas, entre las que se destaca la contaminación auditiva, especialmente en localidades como Kennedy, Bosa y Fontibón.

Durante el desarrollo de las obras, la maquinaria pesada, los equipos de perforación y la actividad constante en frentes de trabajo han provocado niveles de presión sonora que sobrepasan lo permitido por la Resolución 627 de 2006, afectando la salud y el bienestar de los habitantes aledaños. En zonas residenciales, estas emisiones han tenido un impacto considerable, vulnerando el derecho al descanso y a un entorno sano. Las quejas ciudadanas se han intensificado, al punto de que en abril de 2024, en una sesión descentralizada del Concejo de Bogotá realizada en el barrio Las Vegas de Kennedy, más de 40 ciudadanos expresaron públicamente sus denuncias frente al aumento del ruido, la pérdida de tranquilidad y otros efectos colaterales asociados a la construcción del metro.⁵²

Pese a que la Empresa Metro de Bogotá ha dispuesto canales institucionales de atención a peticiones, quejas y reclamos (PQRS), y aunque existen mecanismos formales para reportar afectaciones, los reportes ciudadanos indican que las respuestas institucionales han sido lentas o insuficientes para mitigar los impactos. Las comunidades perciben una falta de acciones correctivas eficaces frente a los efectos sonoros de la obra, lo que ha derivado en un sentimiento de desprotección institucional.

⁵² [Metro de Bogotá: Denuncias en Kennedy](#)

Uno de los factores más críticos identificados en este proceso es la falta de una estrategia clara de gestión del ruido durante la fase constructiva del proyecto. Esto se traduce no solo en molestias para la población, sino también en el incumplimiento de estándares de convivencia establecidos por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De acuerdo con este marco normativo, comportamientos como los que generan ruidos o sonidos que afectan la tranquilidad de las personas se encuentran tipificados en el artículo 93, numeral 3, y deben ser objeto de vigilancia, control y sanción por parte de las autoridades competentes.

ARTÍCULO 93. Comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad que afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse: (...)

3. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su entorno.

En este contexto, resulta urgente fortalecer las acciones de monitoreo ambiental, realizar mediciones permanentes de los niveles de presión sonora y establecer medidas de compensación para las comunidades directamente afectadas. Asimismo, se hace necesario que la Empresa Metro de Bogotá articule sus procesos constructivos con estándares de sostenibilidad urbana y protección a la salud auditiva, en cumplimiento de las normas ambientales y de convivencia vigentes. Esta problemática plantea desafíos importantes para la administración distrital, que debe garantizar tanto la ejecución de obras de alto impacto como la salvaguarda de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

5. Contaminación auditiva y salud pública

La exposición constante a altos niveles de ruido no solo afecta la audición, sino que tiene repercusiones profundas sobre la salud física, mental y emocional de las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado al ruido ambiental como el segundo factor ambiental más perjudicial para la salud en Europa, solo superado por la contaminación atmosférica. Esta advertencia también aplica a contextos urbanos como Bogotá, donde los niveles sonoros exceden con frecuencia los límites recomendados por las autoridades sanitarias internacionales⁵³.

El ruido prolongado y por encima de los 55 dB(A) durante el día o 45 dB(A) en la noche puede ocasionar efectos adversos acumulativos que deterioran el bienestar general. Entre los principales impactos en la salud pública, se destacan:

- **Trastornos del sueño:** La interrupción del sueño causada por ruidos nocturnos —como tráfico, música o maquinaria— puede derivar en fatiga crónica, somnolencia diurna, irritabilidad y un aumento del riesgo de accidentes laborales o de tránsito.
- **Problemas cardiovasculares:** Estudios clínicos han establecido una correlación entre la exposición continua al ruido y el incremento de la presión arterial, así como un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, especialmente en adultos mayores.
- **Deterioro cognitivo en la infancia:** La contaminación sonora afecta negativamente el desarrollo neurológico de niñas y niños. La constante exposición a ruido interfiere con la memoria, la concentración y las habilidades lingüísticas, reduciendo el rendimiento escolar y las oportunidades de aprendizaje a largo plazo.

⁵³ <https://pulsarinstruments.com/es/noticias/la-oms-dice-que-el-ruido-es-uno-de-los-principales-peligros-para-la-salud/>

- Salud mental y emocional: El ruido urbano persistente se ha relacionado con mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión. En ambientes urbanos densos, donde el ciudadano no puede controlar su exposición al sonido, el impacto psicológico puede convertirse en una fuente de malestar crónico⁵⁴.

La Asociación Médica Mundial (AMM) advierte que estos niveles de ruido urbano crónico deben ser reconocidos como una forma de contaminación ambiental con implicaciones directas en la salud pública. Entre sus recomendaciones, se encuentra la promoción de políticas de control acústico urbano, el fortalecimiento de la legislación sobre niveles sonoros permitidos, y la inclusión de la contaminación acústica como prioridad en la planificación territorial y sanitaria.

La AMM también subraya que el ruido no solo genera incomodidad o trastornos del sueño, sino que puede producir efectos biológicos adversos como aumento de la presión arterial, estrés, deterioro del rendimiento cognitivo en escolares, y riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares y mentales. Por ello, considera esencial una respuesta institucional coordinada entre los sectores de salud, ambiente, educación y planificación urbana⁵⁵.

6. Necesidad de lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas

La ausencia de lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas ha limitado significativamente la capacidad institucional del Distrito para enfrentar la contaminación auditiva de forma estructural, preventiva y eficaz. Aunque existen normas puntuales sobre límites máximos permisibles y sanciones por ruido excesivo, estas disposiciones resultan dispersas, reactivas y poco articuladas entre las entidades responsables de la gestión ambiental, de la salud y del orden público.

La implementación de estos lineamientos permitirían establecer normas claras y diferenciales sobre los niveles de ruido permitidos en función de zonas tranquilas, incorporando criterios técnicos, científicos y territoriales. Esto posibilitaría una regulación más precisa y adecuada a las características sonoras de estos entornos urbanos.

Asimismo, dichos lineamientos se centran en fortalecer los mecanismos de control y restricción, mediante protocolos de monitoreo continuo y la capacitación de personal especializado para la medición de emisiones sonoras. También facilitaría una atención más eficaz de las quejas ciudadanas relacionadas con el ruido.

Por otra parte, estos lineamientos se establecen como base para la asignación de recursos y la inversión pública en acciones de mitigación, actualización tecnológica y acondicionamiento acústico en las zonas tranquilas, particularmente aquellas donde se evidencie la coexistencia conflictiva entre actividades comerciales y usos residenciales.

⁵⁴ <https://www.bbc.com/mundo/articulos/cr5nd42jz0jo>

⁵⁵ <https://www.wma.net/es/policias-post/declaracion-de-la-amm-sobre-la-contaminacion-acustica/>

Además, fomentarán procesos pedagógicos y campañas de concientización sobre los efectos del ruido en la salud física y mental, promoviendo una cultura de corresponsabilidad entre los ciudadanos, comerciantes y actores institucionales.

Finalmente, permitirían establecer una coordinación interinstitucional efectiva entre entidades distritales como las secretarías de Ambiente, Salud, Gobierno, Planeación, Movilidad y Seguridad, con la participación activa de las alcaldías locales, el sector empresarial, la academia y la comunidad organizada. Esto garantizaría una respuesta integral, articulada y sostenible frente al fenómeno del ruido urbano.

IV. CONCLUSIÓN

La formulación de lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas constituye una necesidad urgente e impostergable ante los crecientes niveles de contaminación auditiva que afectan gravemente la salud pública, la calidad de vida, la convivencia ciudadana y el equilibrio ambiental en el entorno urbano. La evidencia técnica, proveniente del Mapa Estratégico de Ruido (MER) y de diagnósticos ambientales oficiales, demuestra que zonas de la ciudad presentan niveles de presión sonora que exceden los límites establecidos por la normativa nacional e internacional, especialmente en áreas residenciales.

La contaminación acústica no es solo una molestia, sino un riesgo real para la salud. Su relación comprobada con trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo infantil y afecciones mentales exige una respuesta estructural desde las instituciones públicas. La ausencia de una política pública integral sobre este fenómeno ha impedido una intervención efectiva, generando vacíos normativos, dispersión institucional y respuestas reactivas que no resuelven de fondo la problemática.

Este Proyecto de Acuerdo propone subsanar esa brecha mediante el establecimiento de lineamientos claros, técnicos y territoriales para la formulación e implementación de protección y gestión de zonas tranquilas que permita gestionar el entorno sonoro urbano de forma planificada, interinstitucional y participativa. La iniciativa no pretende limitar la actividad económica ni la vida urbana, sino establecer un marco de equilibrio y corresponsabilidad entre desarrollo, productividad y bienestar ciudadano. Se trata de construir una Bogotá que escuche a su ciudadanía, que reconozca el valor del silencio como parte del derecho a un ambiente sano y que actúe de manera decidida frente a una de las formas más invisibles pero persistentes de contaminación.

En definitiva, este Proyecto de Acuerdo es una apuesta por una ciudad más humana, ordenada y saludable. Una ciudad donde el progreso no implique ruido, y donde el derecho al descanso, al aprendizaje, al diálogo y a la tranquilidad puedan ser garantizados para todos y todas.

V. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.

Este proyecto de acuerdo busca mitigar los efectos negativos del ruido ambiental sobre la salud física y mental de los habitantes de Bogotá D.C., reconociendo que la contaminación auditiva es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño, estrés crónico, ansiedad y deterioro cognitivo, especialmente en niños y adultos mayores. Al implementar una política de calidad acústica, se promueven condiciones de vida más saludables, entornos urbanos seguros y el bienestar emocional de la ciudadanía, reduciendo la carga sobre el sistema de salud pública.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y a la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

La formulación de una Política Distrital de Calidad Acústica contribuirá directamente a la sostenibilidad ambiental urbana mediante la regulación del entorno sonoro, el control de fuentes de ruido y la promoción de prácticas responsables en la planeación del territorio. Esto incluye la aplicación del Mapa Estratégico de Ruido (MER) como herramienta técnica para definir zonas prioritarias de intervención y garantizar el uso adecuado del suelo según la presión sonora ambiental. Así, se construye una ciudad más resiliente, ordenada y con mejor calidad de vida para todos sus habitantes.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027”

14.6. Programa 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. *Debemos disminuir la afectación negativa sobre los ecosistemas y reducir los impactos ambientales asociados a la calidad del recurso hídrico, del aire, acústico y visual, de emisión de ruido, de publicidad exterior visual, y del suelo de protección y de la fauna y flora silvestres.*

El Programa 28, enmarcado en el objetivo estratégico del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”, tiene como finalidad reducir la afectación negativa sobre los ecosistemas urbanos y rurales, a través del control de distintos tipos de emisiones y de la mitigación del deterioro ambiental en la ciudad. Dentro de sus líneas prioritarias se encuentran el mejoramiento de la calidad del aire, el recurso hídrico, la gestión del suelo de protección, así como la regulación de la contaminación acústica y visual.

El proyecto de acuerdo que establece los lineamientos para la formulación de una Política Distrital de Calidad Acústica guarda una estrecha relación con este programa, al enfocarse directamente en uno de los componentes que el mismo busca controlar: la emisión de ruido ambiental. A través de esta política se pretende generar un marco normativo, institucional y técnico que permita prevenir, controlar y mitigar los efectos nocivos del ruido en el entorno urbano, protegiendo tanto la salud pública como los ecosistemas locales.

La iniciativa fortalece el compromiso del Distrito con la sostenibilidad ambiental, al proponer acciones específicas como el uso del Mapa Estratégico de Ruido (MER), la delimitación de zonas de alta sensibilidad acústica, la adopción de tecnologías silenciosas y la armonización de la normativa distrital con los estándares nacionales e internacionales sobre contaminación sonora.

De igual manera, el proyecto aporta a los objetivos del programa al propiciar la articulación entre entidades como la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Salud, y las alcaldías locales para ejercer control efectivo sobre las fuentes emisoras de ruido. Así, se favorece un desarrollo urbano más armónico, con criterios de justicia ambiental, prevención del riesgo y equidad territorial.

En este contexto, la formulación de lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas seguras no solo responde al mandato de protección ambiental del Programa 28, sino que se convierte en un instrumento clave para garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano y para consolidar una Bogotá más ordenada, saludable y resiliente frente al cambio climático y la presión urbana.

VII. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

VIII. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Atentamente,
JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
H. Concejal de Bogotá D.C.
Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO N° 883 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS TRANQUILAS EN BOGOTÁ D.C., COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la promoción, delimitación, protección y gestión de zonas tranquilas en Bogotá D.C., con el fin de prevenir y mitigar los efectos nocivos de la contaminación acústica sobre la salud, la intimidad y la tranquilidad de la ciudadanía.

Artículo 2. Definiciones. El presente acuerdo tendrá en consideración las siguientes definiciones:

- 1. Contaminación acústica.** Alteración del ambiente con ruidos o vibraciones nocivas, molestas o no deseadas, que impactan en la salud, la calidad de vida y que implican un riesgo para la salud pública o degradan la calidad del ambiente en sus diferentes medios.
- 2. Efectos en la salud.** Dependiendo de los niveles y el tiempo de exposición, la contaminación acústica puede causar algunos de los siguientes inconvenientes en la salud física y mental de los seres humanos: daño cardiovascular; problemas auditivos unilaterales o bilaterales como pérdida auditiva permanente; pérdida auditiva temporal, fatiga auditiva, tinnitus, entre otros; asimismo, puede generar daños en la salud psicosocial como estrés, malestar e irritabilidad; problemas en el aprendizaje, disminución de la capacidad de atención, concentración, memoria, y problemas comunicativos para diferenciar sonidos, palabras, oraciones, comprender mensajes, entre otros.

- 3. Fuentes de emisión sonora.** Pueden ser fijas o móviles, permanentes o estacionarias. Dentro de las fijas se encuentran las actividades económicas del tipo industrial, comercial y de servicios como equipos de refrigeración, de inyección, servicios públicos, ductos de extracción de aire, extractores, bares, gastrobares, restaurantes y similares. Las fuentes móviles se asocian principalmente al sector transporte como el tránsito vehicular, aéreo, ferroviario, marítimo, fluvial o aeroportuario, vehículos con exhostos modificados y el perifoneo comercial. Asimismo, existen fuentes de emisión sonora estacionarias, como son las actividades culturales, deportivas, conciertos y festivales, armas de fuego, gritos, riñas, sonido generado por equipos de poda, zonas de construcción, entre otros.
- 4. Indicadores o descriptores acústicos.** Todos aquellos indicadores o descriptores nacionales o internacionales que miden, cuantifican y describen la calidad acústica, bien sea en salud, en la convivencia, en lo ambiental, al interior de una edificación, la emisión de fuentes fijas y móviles, entre otros.
- 5. Servidumbre acústica.** Territorio delimitado en los mapas de ruido, en los que las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas y donde se podrán establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para aquellos.
- 6. Zonas tranquilas:** Espacio urbano delimitado por la autoridad competente, conforme a las disposiciones del presente artículo y las normas reglamentarias que lo desarrollen, que comprende áreas residenciales o exclusivamente destinadas al desarrollo habitacional, cuya preservación es prioritaria para garantizar la calidad del ambiente acústico y proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía.

Artículo 3. Delimitación. La Administración Distrital, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, reglamentará el procedimiento para la delimitación de las zonas tranquilas, en concordancia con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y las normas vigentes sobre uso del suelo, calidad acústica y convivencia ciudadana, el cual deberá garantizar la participación efectiva de la ciudadanía, incluyendo a las organizaciones comunales, los consejos locales de planeación y las organizaciones de propiedad horizontal, a través de mecanismos de consulta, concertación o incidencia en la toma de decisiones.

Artículo 4. Existencia. Una vez declarada una zona tranquila por la autoridad competente, su existencia y características deberán ser consideradas en los procedimientos sancionatorios, policivos y contravencionales que se adelanten por el incumplimiento de los límites de emisión de ruido establecidos en la normatividad vigente, o por perturbación a la convivencia establecidos en dichas zonas.

Parágrafo: La delimitación de las zonas tranquilas en Bogotá podrá servir como insumo para la revisión y formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y demás instrumentos de planificación territorial.

Artículo 5. Protecciones. Una vez declarada una zona tranquila por la autoridad competente, la administración distrital de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial podrá limitar el desarrollo de actividades económicas que generen ruido constante, aglomeraciones o impactos acústicos significativos. Entre estas se encuentran bares, discotecas, cantinas, tabernas, salas de juego, billares, casinos y demás establecimientos abiertos al público que afecten las condiciones de tranquilidad y bienestar de la zona. Así mismo, la existencia de zonas tranquilas deberá ser tenida en cuenta en la formulación e implementación de planes, proyectos y actuaciones orientadas a la mejora de la movilidad en Bogotá, garantizando que las intervenciones en infraestructura vial o en el sistema de transporte no vulneren el ambiente acústico ni la vocación habitacional de estas áreas.

Artículo 6. Promoción. La Administración Distrital, a través de sus canales institucionales y con el apoyo de las entidades competentes, propenderá por realizar campañas de información, sensibilización y apropiación ciudadana sobre las Zonas Tranquilas, destacando sus beneficios para la salud, la convivencia y el ambiente.

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y Cúmplase

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Concejal de Bogotá
Partido Centro Democrático